



**UNIVERSIDAD NACIONAL  
“PEDRO RUIZ GALLO”  
ESCUELA DE POSTGRADO**



**MAESTRÍA EN DERECHO**

---

**“La política criminal del enemigo aplicada en la lucha  
contra la criminalidad organizada”**

**TESIS**

**PRESENTADA PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE  
MAESTRA EN DERECHO CON MENCIÓN EN CIENCIAS PENALES**

**AUTORA:**

Abog. Santa Cruz García Mariela Lucerito

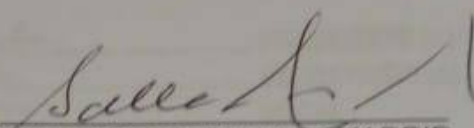
**ASESOR:**

Dr. Luis Humberto Falla Lamadrid

**LAMBAYEQUE – PERÚ  
2018**

Por:

  
Abog. MARIELA LUCERITO SANTA CRUZ GARCÍA

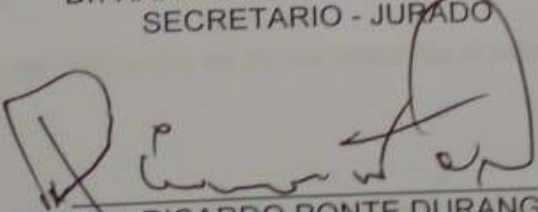
  
Dr. LUIS HUMBERTO FALLA LAMADRID

Presentada a la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo,  
para optar el Grado Académico de **MAESTRA EN DERECHO CON MENCIÓN EN  
CIENCIAS PENALES.**

Aprobada por:

Dr. JOSÉ MARÍA BALCAZAR ZELADA  
PRESIDENTE - JURADO

Dr. RAFAEL HERNÁNDEZ CÁNELO  
SECRETARIO - JURADO

  
Mg. RICARDO PONTE DURANGO  
VOCAL - JURADO

Lambayeque, Abril de 2018

Siendo las 6:30 p.m. horas del día 06 de Setiembre del año Dos Mil dieciocho, en la Sala de Sustentaciones de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, se reunieron los miembros del jurado, designados mediante Resolución N° 14.20.2017-EPE de fecha 18 de Octubre 2017, conformado por:

Dr. José Maximiliano Balazar Zalapa PRESIDENTE (A)  
Dr. Rogail Hernández Canch SECRETARIO (A)  
M.Sc. Ricardo Ponte Durango VOCAL  
Dr. Humberto Falla Lamadrid ASESOR (A)

con la finalidad de evaluar la tesis titulada La Falta de Cumplimiento del  
Enemigo Aplica en la Lucha Contra la Criminalidad  
Organizada

presentado por el (la) tesista Marcelo Lucarito Gutierrez Garcia  
sustentación que es autorizada mediante Resolución N° 17.91-2018-EPE de fecha 27 de agosto de 2018

El Presidente del jurado autorizó el inicio del acto académico y después de la sustentación, los señores miembros del jurado formularon las observaciones y preguntas correspondientes, las mismas que fueron absueltas por el (la) sustentante, quien obtuvo 75 puntos que equivale al calificativo de Buena

En consecuencia el (la) sustentante queda apto (a) para obtener el Grado Académico de MAESTRÍA EN DERECHO CON MENCIÓN EN  
CIENCIAS PENALES

Siendo las 8:00 pm horas del mismo día, se da por concluido el acto académico, firmando la presente acta.

[Firma]  
PRESIDENTE

[Firma]  
SECRETARIO

[Firma]  
VOCAL

[Firma]  
ASESOR

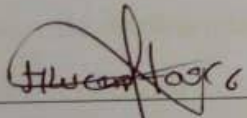
**Declaración Jurada de Originalidad.**

Yo... Mariela Lucerito Santa Cruz García (investigadora principal) y Dr. Luis Humberto Falla Lamadrid, asesor del trabajo de investigación **"La política criminal del enemigo aplicada en la lucha contra la criminalidad organizada"**, declaramos bajo juramento que este trabajo no ha sido plagiado ni contiene datos falsos. En caso se demostrara lo contrario asumo responsablemente la anulación de este informe y por ende el proceso administrativo a que hubiere lugar Que puede conducir a la anulación del título o grado emitido como consecuencia de este informe.

Lambayeque, 10 de febrero de 2020.

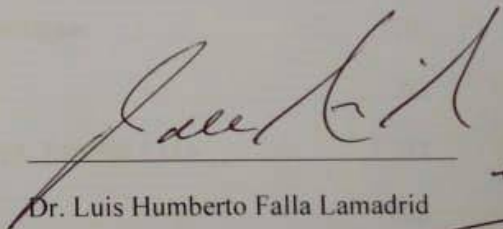
Nombre del investigador: Mariela Lucerito Santa Cruz García.

Nombre del asesor: Luis Humberto Falla Lamadrid.



Mariela Lucerito Santa Cruz García

DNI N° 42230523



Dr. Luis Humberto Falla Lamadrid

DNI N° 16659492

## **DISPERSIÓN TEMÁTICA**

RESUMEN.....	8
ABSTRACT.....	9
INTRODUCCIÓN.....	10

### **CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO**

1.1. UBICACIÓN.....	12
1.1.1. Ubicación Geográfica.....	12
1.1.2. Ubicación Temporal.....	12
1.2. SURGIMIENTO DEL PROBLEMA.....	13
1.2.1. Planteamiento del Problema.....	19
1.2.2. Justificación del estudio del problema a investigar.....	19
1.2.3. Marco de Referencia del Problema.....	20
1.3. MANIFESTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA.....	21
1.4. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA.....	22
1.4.1. Formulación de Hipótesis.....	22
1.4.1.1. Hipótesis.....	22
1.4.1.2. Identificación de Variables.....	22
1.4.2. OBJETIVOS.....	23
1.4.2.1. Objetivo General.....	23
1.4.2.2. Objetivos Específicos.....	23
1.4.3. Área de Estudio – Ubicación Metodológica.....	23
1.4.4. Delimitación de la Investigación.....	24

1.4.5. Métodos y Técnicas.....	24
1.4.6. Población de Estudio.....	24
1.4.7. Muestra de Estudio.....	25

## **CAPITULO II: MARCO TEÓRICO**

### **SUB CAPITULO I: MODERNAS TENDENCIAS DEL DERECHO PENAL Y EL**

#### **DERECHO PENAL DEL ENEMIGO**

1. EL DERECHO PENAL.....	26
2. EL DERECHO PENAL DEL CIUDADANO.....	29
3. EL DERECHO PENAL DE LA SEGURIDAD.....	31
4. EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO.....	32
4.1. Antecedentes.....	32
4.2. El Enemigo.....	34
4.3. Concepto.....	37
5. CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO.....	39
5.1. La pertenencia del autor a una categoría subjetiva asumida como criterio fundante de un especial tratamiento sancionatorio.....	39
5.2. La De-jurisdiccionalización del proceso de aplicación de la sanción.....	40
5.3. La orientación de la sanción hacia la neutralización, la exclusión o incluso la eliminación del autor.....	41
6. DIFERENCIAS DEL DERECHO PENAL DEL CIUDADANO Y DEL ENEMIGO.....	43
7. ELEMENTOS DEL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO.....	44

## **SUB CAPITULO II: LA POLÍTICA CRIMINAL**

1. GENERALIDADES.....	46
2. CONCEPTO DE POLÍTICA CRIMINAL.....	47
3. POLÍTICA CRIMINAL POR LA PREVENCIÓN FÁCTICA.....	50
4. CLASES DE POLÍTICA CRIMINAL.....	52
4.1. En el campo penal.....	52
4.2. En el campo procesal penal.....	55
4.3. En el ámbito penitenciario o post penal.....	56
5. LA SOBRECriminalIZACIÓN.....	58
6. POSICIÓN DE LA AUTORA.....	59

## **SUB CAPÍTULO III: LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA**

1. CONCEPTO DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA.....	62
2. CARACTERÍSTICAS DEL CRIMEN ORGANIZADO.....	63
3. DELITOS PROPIOS DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA.....	68
4. CONCEPTO DE BANDA CRIMINAL.....	70
5. DIFERENCIAS DEL CRIMEN ORGANIZADO CON BANDA CRIMINAL.....	71
6. EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO.....	73
7. EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO EN EL MUNDO.....	74
8. NORMAS EN LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA.....	76
9. POLÍTICA CRIMINAL DURANTE EL GOBIERNO 2011-2016.....	77
10. POLÍTICA CRIMINAL DURANTE EL GOBIERNO 2016-2018.....	82

### **CAPITULO III: RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO**

3.1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.....	88
3.1.1. Encuesta Aplicada a Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque.....	88
3.12. Análisis de los Resultados.....	102
3.3. Contrastación de Hipótesis.....	110
CONCLUSIONES.....	111
RECOMENDACIONES.....	112
BIBLIOGRAFÍA.....	113
Libros.....	113
Hemerográficas.....	120
Legislación.....	126
Linkográficas.....	127



## RESUMEN

La política criminal es el conjunto de estrategias destinadas a combatir la delincuencia, especialmente la criminalidad organizada, siendo que por tal motivo el gobierno de turno (2016-2020) y el anterior (2011-2016) aplicaron una política criminal en base a satisfacer el clamor popular sobre la imposición de penas muy elevadas y restricción de beneficios penitenciarios para aquellos que cometen delitos y que pertenecen a una organización criminal.

Es de notarse que la política criminal actual contra la criminalidad organizada u organización especializada en el crimen es de influencia del derecho penal del enemigo pero en una inadecuada aplicación, toda vez que impone penas muy elevadas y restringe o impide beneficios penitenciarios, renunciando de esta manera a todo tipo de resocialización. En tal sentido, la investigación propone que la política criminal peruana debe estar encaminada de acuerdo a los fundamentos del derecho penal del enemigo en el entendido como un derecho de naturaleza excepcional que constituye una reacción frente a la posible inestabilidad que puedan causar las acciones de los enemigos contra el Estado y que busca la erradicación o eliminación del enemigo, con estrategias propias político-criminales, reforzando y reformulando la persecución penal de los delitos cometidos por persona u organización de manera violenta, pero buscando su resocialización.

**PALABRAS CLAVES:** Política criminal, criminalidad organizada, derecho penal del ciudadano, derecho penal del enemigo.

LA AUTORA

## **ABSTRACT**

Criminal policy is the set of strategies aimed at combating crime, especially organized crime, being that for this reason the current government (2016-2020) and the previous one (2011-2016) applied a criminal policy based on meeting the popular clamor on the imposition of very high penalties and restriction of penitentiary benefits for those who commit crimes and who belong to a criminal organization. It should be noted that the current criminal policy against organized crime or specialized organization in crime is influenced by the criminal law of the enemy but in an inadequate application, since it imposes very high penalties and restricts or prevents penitentiary benefits, renouncing in this way to all kinds of re-socialization. In this regard, the investigation proposes that Peruvian criminal policy should be directed according to the foundations of the criminal law of the enemy in the understanding of a right of an exceptional nature that constitutes a reaction to the possible instability that may be caused by the actions of the enemies against the State and that seeks the eradication or elimination of the enemy, with its own political-criminal strategies, reinforcing and reformulating the criminal prosecution of crimes committed by a person or organization in a violent manner, but seeking their re-socialization.

**KEYWORDS:** Criminal policy, organized crime, criminal law of the citizen, criminal law of the enemy

THE AUTHOR

## **I. INTRODUCCIÓN**

En la realidad nacional peruana se viene dando un fenómeno de mucha trascendencia social como es precisamente la realización de actos criminales o delincuenciales, criminalidad que va en aumento incluso ha logrado especializarse hasta llegar a lo que conocemos como crimen organizado, la cual se encuentra estratificada, es decir dentro de la organización criminal hay lideres o cabecillas y miembros integrantes, cada uno con funciones específicas. Así, en la lucha contra la criminalidad organizada durante el gobierno anterior y el de turno se han promulgado una serie de normas como política criminal para hacerle frente en la lucha contra esta criminalidad organizada, siendo que poco o nada se ha hecho por reducir los índices de criminalidad, por lo que la inseguridad ciudadana es muy notoria y se pretendió combatirla con la elevación de penas o recorte de beneficios penitenciarios como política criminal asumida pero radicando el error en que ella se plasma sólo para satisfacer el pedido popular, pero no en base a una adecuada y justificada política criminal basada en los fundamentos del derecho penal del enemigo como la eliminación y erradicación del enemigo, pero buscando su resocialización.

La investigación ha sido estructurada en tres capítulos claramente diferenciados, pero a la vez, relacionados entre sí; teniendo su parte introductoria. El primer capítulo referido al Análisis del Objeto de Estudio, en donde se abordan temas precisos sobre la ubicación del objeto de estudio, el surgimiento del problema, la manifestación y características del problema, así como aspectos metodológicos como la formulación de la hipótesis debidamente contrastada, a través del cumplimiento de los diversos objetivos, tanto general, como específicos.

El segundo capítulo de la investigación corresponde al MARCO TEÓRICO, estructurado en tres sub capítulos, el primero referido a la pena privativa de la libertad y los derechos fundamentales; el segundo sub capítulo aborda, los beneficios penitenciarios y el sistema penitenciario; el tercer sub capítulo abarca lo referente a la reeducación, **rehabilitación** y resocialización penitenciaria. De donde resulta que el marco teórico se encuentra estructurado por los diversos planteamientos doctrinarios tanto de autores nacionales como extranjeros que sirven de sustento a los fines de la presente investigación.

El último capítulo lo conforma el análisis y discusión de los resultados obtenidos de la recolección de datos proporcionados por el INPE y del Establecimiento penitenciario de Chiclayo, así como la aplicación de la encuesta innominada aplicada a Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, tabulándose dicha información en cuadros y gráficos estadísticos, todo ello con la finalidad de contrastar la hipótesis y dar sustento a las conclusiones y recomendaciones; las cuales se ponen en consideración de la comunidad jurídica, local y nacional, para las críticas a que hubieran lugar.

Lambayeque, Abril de 2018.

Abog. MARIELA LUCERITO SANTA CRUZ GARCÍA

TESISTA

## **CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO**

### **1.1. UBICACIÓN**

#### **1.1.1. Ubicación Geográfica**

El objeto de estudio de la presente investigación se localiza sobre la problemática que sucede en el plano nacional, acerca de la adopción como Política Criminal que se viene aplicando tanto en el gobierno de turno como la que se aplicó en el gobierno anterior del ex presidente Ollanta Humala Tasso con la finalidad de combatir la delincuencia generada por el crimen organizado.

Directamente hablando, la presente investigación se desarrollará en la ciudad de Chiclayo donde se aplicará una encuesta innominada tanto a Jueces, Fiscales y Abogados pertenecientes al Distrito Judicial de Lambayeque con la finalidad de determinar cuál es la percepción sobre la política criminal que se aplicó durante el gobierno anterior así como también en lo que va del gobierno de turno, sobre las recientes modificaciones efectuadas en las leyes que sobre la criminalidad organizada se han emitido, para hacerle frente.

#### **1.1.2. Ubicación Temporal**

El objeto de estudio de la presente investigación se ubica desde el momento que entro a dirigir el gobierno anterior, (2010-2015) sobre la Política Criminal que durante este período adoptó para hacerle frente a la lucha contra la criminalidad organizada, hasta el año 2017 del gobierno de turno y la adopción de la política criminal en la lucha contra la criminalidad organizada.

## **1.2. SURGIMIENTO DEL PROBLEMA**

La presente investigación centra su estudio de manera general sobre el Derecho Penal, en especial sobre la Política Criminal adoptada por el Estado tanto por el gobierno anterior como por el gobierno de turno, para hacerle frente a la criminalidad organizada, es decir sobre la promulgación de normas dirigidas a luchar contra la actividad delictual de manera organizada en la última década.

A través de los diferentes medios de comunicación nos informamos o conocemos que se cometen diariamente una infinidad de delitos, siendo algo especial y que genera muchas consecuencias jurídicas, es precisamente la criminalidad organizada, es decir los delitos cometidos no por una sola persona o un grupo reunido del momento para cometer un acto ilícito, sino que es un delito o delitos cometidos por muchas personas que se encuentran debidamente organizadas y especializadas en los actos delictuales que cometen. En ese sentido, el Estado con la finalidad de hacerle frente a dicha organización criminal o especializada en el crimen ha dictado una serie de normas que tratan de combatirla o reducir sus índices, pero ello ha resultado en un fracaso porque los índices de criminalidad no han disminuido, por el contrario ha ido en aumento y es por tal motivo que los centros penitenciarios se encuentran con uno de los tantos problemas que aquejan, como es precisamente el hacinamiento penitenciario o sobrepoblación en las cárceles, no sólo en el establecimiento penal de Chiclayo- ex Pisci, sino en todas las cárceles del país.

Ahora bien, la criminalidad organizada es un grave problema para el Estado porque no se trata de combatir a una delincuencia simple, sino que por el hecho de

estar organizados resulta más difícil hacerle frente, lo cual lo demostró el gobierno anterior que pese a dictar normas para combatirla no logró lo tan esperado en cuanto a la reducción de la criminalidad y menos aún se logró generar la tan aclamada seguridad ciudadana o paz social para todos los peruanos.

En ese sentido, se tiene que dentro del endurecimiento de la Política Criminal para frenar la inseguridad ciudadana por parte del gobierno anterior, el congreso en ejercicio de su potestad de calificar conductas, y fijar las sanciones y los procedimientos, dictó la Ley N° 30076: “Ley que modifica el Código Penal, Código Procesal Penal, Código de Ejecución Penal y el Código de los Niños y Adolescentes y crea registros y protocolos con la finalidad de combatir la inseguridad ciudadana”, de fecha 19 de agosto de 2013, esta ley por ejemplo modificó el artículo 22° del Código penal, sobre la Responsabilidad restringida por la edad en la que excluye de la reducción prudencial la pena por la edad, precisando que: “(...) Está excluido el agente integrante de una organización criminal o que haya incurrido en delito de violación de la libertad sexual, homicidio calificado, homicidio calificado por la condición oficial del agente, feminicidio, extorsión, secuestro, robo agravado, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, terrorismo agravado, apología, atentado contra la seguridad nacional, traición a la Patria u otro delito sancionado con pena privativa de libertad no menor de veinticinco años o cadena perpetua”.

Así también con la ley N° 30077, de fecha 20 de agosto de 2013, Ley contra el crimen organizado, siendo que este dispositivo jurídico tiene por objeto fijar las reglas y procedimientos relativos a la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos cometidos por organizaciones criminales a través de 30 artículos, 4

disposiciones complementarias transitorias, 6 disposiciones complementarias modificatorias y una disposición complementaria derogatoria.

Luego, con la Ley N° 30262, “Ley que modifica el Código de ejecución Penal, la ley contra el Crimen Organizado, la ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes”. de fecha 06 de Noviembre de 2014, en su artículo segundo modifica el artículo 24° de la Ley N° 30077, Ley contra el Crimen Organizado, con respecto a la prohibición de beneficios penitenciarios se señala que “no pueden acceder a los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación, semi-libertad y liberación condicional: a) Si el agente es líder, jefe o cabecilla o ejerce funciones de administración, dirección y supervisión de una organización criminal; si el agente financia la organización criminal; y si el agente, en condición de integrante de la organización criminal o persona vinculada a ella o que actúa por encargo de la misma, atenta contra la integridad física o psicológica de menores de edad u otros inimputables; y b) Los demás integrantes de la organización criminal, siempre que el delito por el que fueron condenados sea homicidio calificado; secuestro; trata de personas y agravantes; rufianismo o extorsión, de acuerdo a lo señalado en el Código Penal”.

Por otro lado, dentro de las medidas de seguridad el actual gobierno dictó el Decreto Legislativo N° 1244, “Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el crimen organizado y la tenencia ilegal de armas”, publicado el 29 de Octubre de 2016, a través de su artículo 2° modifica el artículo 317° del Código Penal, en los siguientes términos: “Artículo 317°.- Organización Criminal. El que promueva, organice, constituya, o integre una organización criminal de tres o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada o coordinada, se



repartan diversas tareas o funciones, destinada a cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa, e inhabilitación conforme al artículo 36°, incisos 1), 2), 4) y 8). La pena será no menor de quince ni mayor de veinte años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa, e inhabilitación conforme al artículo 36°, incisos 1), 2), 4) y 8) en los siguientes supuestos: Cuando el agente tuviese la condición de líder, jefe, financista o dirigente de la organización criminal. Cuando producto del accionar delictivo de la organización criminal, cualquiera de sus miembros causa la muerte de una persona o le causa lesiones graves a su integridad física o mental”.

Finalmente, la reciente modificatoria en la constitución peruana a través de la Ley N° 30558, Ley de reforma del literal F del inciso 24 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú, del 9 de mayo del 2017, señala que: “(...) *Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. La detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones y, en todo caso, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas o en el término de la distancia. Estos plazos no se aplican en los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y a los delitos cometidos por organizaciones criminales. En tales casos las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término*”.

En este sentido, se tiene que las reformas penales y constitucionales están dirigidas a endurecer las penas para los delitos cometidos por organizaciones criminales como en la reciente modificatoria constitucional que agrega que por delitos cometidos por organización criminal podrá permanecer detenido en sede policial por un plazo máximo de quince días.

Estas modificatorias en la normatividad penal y constitucional, se hace con la finalidad de combatir la criminalidad organizada, hacerle frente a la inseguridad ciudadana, así como también para satisfacer intereses políticos, demagógicos, y momento coyuntural como es el caso de obedecer a una parte de la población que solicita penas más duras para los delitos cometidos por organizaciones criminales, es por ello que como parte de la Política Criminal el Estado legisló, con las normas citadas, en el sentido de elevar las penas para ciertos delitos, sobre todo aquellos cometidos por miembros integrantes del crimen organizado.

Finalmente, el gran problema en la realidad nacional es sí para adoptar una adecuada Política Criminal, sería necesario la incorporación de los fundamentos jurídicos y doctrinarios de la teoría del Derecho Penal del Enemigo para hacerle frente a la lucha contra la criminalidad organizada.

De lo anterior, conlleva a preguntarnos: ¿Qué es el crimen organizado?, ¿qué se entiende por Banda?, ¿Cuáles son las diferencias entre el crimen organizado y grupo delictivo?, ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la Política Criminal?, ¿Qué se entiende por Política Criminal?, ¿Cuál es la política criminal que se ha tomado en la última década para hacer frente a la criminalidad organizada?, ¿Con el endurecimiento de las penas se logrará reducir la delincuencia cometida por el

crimen organizado?, ¿Elevar las penas para los delitos cometidos por la criminalidad organizada permitirá generar seguridad en la ciudadanía nacional?, ¿Cuál es el tratamiento doctrinario sobre la política criminal en la lucha contra el crimen organizado?, ¿Cuál es grado de conocimiento sobre la política criminal empleada para la lucha contra la organización criminal en el Distrito Judicial de Lambayeque?, ¿Cuál es la política criminal empleada por el Estado peruano en el último decenio para la lucha contra la criminalidad organizada?, ¿La política criminal empleada por el gobierno anterior resultó ser más beneficiosa que la empleada por el actual gobierno En la lucha contra la criminalidad organizada?, 'En qué consiste el derecho penal del enemigo?, ¿Cuáles son los principales aportes del derecho penal del enemigo?, ¿Cuáles serían los beneficios del derecho penal del enemigo en la lucha frontal contra el crimen organizado?

#### **1.2.1. Planteamiento del Problema**

¿Es necesario imponer una la política criminal orientada a considerar como enemigo a los miembros de una organización criminal que conlleve al endurecimiento de las penas y restricción de beneficios penitenciarios para lograr resultados eficaces en la búsqueda de la reducción de los índices de la delincuencia y garantizar la seguridad ciudadana?

#### **1.2.2. Justificación del estudio del problema a investigar**

El presente trabajo de investigación se justifica porque proporcionaría un aumento del conocimiento sobre la política criminal empleada por el Estado Peruano en la lucha contra la criminalidad organizada, así como también permitirá un ahondamiento de las características y actividades del crimen organizado y sobre todos de las modificatorias legislativas como política criminal

que se han producido sobre los delitos cometidos por las organizaciones criminales.

Con la presente investigación, también, se pretende analizar y comparar la efectividad de la política criminal empleada por cada gobierno en la lucha contra la criminalidad organizada determinado el de mayor efectividad y sobre todo la generación de seguridad ciudadana, pretendiendo proporcionar bases sólidas para la aplicación de una adecuada política criminal para la reducción de los índices de la criminalidad organizada.

Finamente, la presente investigación justifica su estudio e importancia en el tratamiento de la teoría del Derecho Penal del Enemigo propuesta por el alemán GUNTHERS JAKOBS precisando los aportes beneficios en la adopción de una política criminal adecuada en la lucha frontal contra el crimen organizado.

### **1.2.3. Marco de Referencia del Problema**

El marco de referencia de la presente investigación está conformado por las informaciones de la dogmática jurídica, las investigaciones más importantes realizadas sobre el particular, reforzado con los resultados obtenidos del trabajo de campo a realizar en el Distrito Judicial de Lambayeque, lo que nos permite contrastar las diversas teorías de autores nacionales y extranjeros, así como por revistas especializadas, con la finalidad de determinar la efectividad de la política criminal por el estado peruano en la lucha contra la criminalidad organizada aplicada en el último decenio.

En el desarrollo de nuestra investigación se tomó como teoría la doctrina nacional y extranjera que promueve el estudio de la Política Criminal aplicada en

el Perú para la lucha contra el crimen organizado, el derecho penal del Enemigo. Así, la mejor comprensión del objetivo a seguir con el presente trabajo investigativo se logra a partir de las diferentes tendencias doctrinales que abordan el tema bajo estudio.

### **1.3. MANIFESTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA**

La investigación se manifiesta a través de la aplicación de la Política criminal para hacer frente a la delincuencia cometida por el crimen organizado tanto a nivel nacional como en el Distrito Judicial de Lambayeque. Para ello se han promulgado una serie de dispositivos normativos en el último decenio que tienen como característica principal el endurecimiento de las penas o reducción de beneficios penitenciarios para los delitos cometidos por agentes pertenecientes a una organización criminal.

Desde el gobierno anterior iniciado en el año 2010 hasta la actualidad con el gobierno de turno se han dado una serie de normas y dispositivos legales caracterizándose por la modificación del Código Penal, Procesal Penal, Código de Ejecución Penal, leyes especiales e incluso hasta la Constitución como política criminal de endurecimiento de las penas y recorte de beneficios penitenciarios con la finalidad de combatir y reducir los índices de criminalidad cometidos por la organización criminal, así como también generar la tan ansiada seguridad ciudadana.

Finalmente, debemos precisar que este problema se caracteriza porque no sólo abarca al Distrito Judicial de Lambayeque sino que es a nivel nacional ya que la

política criminal se emplea a nivel nacional y además porque el crimen organizado tiene una magnitud que alcanza a todos los lugares del país e incluso a nivel internacional.

## **1.4. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA**

### **1.4.1. Formulación de Hipótesis**

#### **1.4.1.1. Hipótesis:**

“**SI**, se implementara una adecuada política criminal basada en los fundamentos jurídico-doctrinarios del Derecho Penal del enemigo y lo positivo de las reformas legislativas y constitucionales para hacerle frente a la lucha contra el crimen organizado; **Entonces**, se logrará una reducción notable de los índices de la criminalidad, así como también generará seguridad ciudadana”.

#### **1.4.1.2. Identificación de Variables:**

Las variables quedan expresadas en los siguientes términos:

##### **A. Variable Independiente:**

Implementación de una adecuada política criminal basada en los fundamentos jurídico-doctrinarios del Derecho Penal del enemigo y lo positivo de las reformas legislativas y constitucionales para hacerle frente a la lucha contra el crimen organizado

##### **B. Variables Dependientes:**

- reducción notable de los índices de la criminalidad Organizada.
- Generación de seguridad ciudadana en la población nacional.

## **1.4.2. OBJETIVOS**

### **1.4.2.1. Objetivo General**

Analizar los fundamentos jurídico-doctrinarios del Derecho Penal del enemigo y lo positivo de las reformas legislativas y constitucionales para hacerle frente a la lucha contra el crimen organizado y lograr una reducción notable de los índices de la criminalidad, así como también generará seguridad ciudadana.

### **1.4.2.2. Objetivos Específicos**

1. Estudiar y comprender el accionar del Crimen Organizado como agente que desestabiliza la seguridad ciudadana.
2. Explicar los fundamentos jurídicos-doctrinarios del Derecho Penal del Enemigo.
3. Analizar la Política criminal del gobierno anterior y la del gobierno de turno para determinar el de mayor efectividad en la lucha contra la criminalidad organizada.
4. Proporcionar los fundamentos jurídicos- doctrinarios para la implementación de una adecuada Política Criminal en la lucha contra la criminalidad organizada.

### **1.4.3. Área de Estudio – Ubicación Metodológica:**

**a. Área de estudio** : Dimensión Praxiológica

**b. Nivel Epistemológico** : Valoración.

**c. Tipo de Investigación:** Investigación Cuantitativa-Cualitativa y Teórica-Explicativa.

#### **1.4.4. Delimitación de la Investigación:**

- a. Espacial:** En la ciudad de Chiclayo
- b. Temporal:** Tiempo necesario en analizar el tema bajo estudio.
- c. Cuantitativa:** Cantidad de normas emitidas tanto por el gobierno de turno como el anterior como política criminal para la lucha contra el crimen organizado.
- d. Cualitativa:** Nivel de valoración de las opiniones de los operadores del derecho en cuanto a la aplicación de la política criminal por parte del estado peruano en la lucha contra la criminalidad organizada.

#### **1.4.5. Métodos y Técnicas**

- A. Métodos:** Tenemos los siguientes: Inductivo-Deductivo, exegético, analítico, sintético, descriptivo-explicativo y dogmático.
- B. Técnicas** Entre ellas, tenemos: Observación, bibliográficas, fichaje y encuestas.

#### **1.4.6. Población de Estudio**

La población estará conformada por todos los procesos Judicial sobre los delitos cometidos por alguna organización criminal en el Distrito Judicial de Lambayeque, con la finalidad de determinar qué tipo de pena se aplicó. Asimismo, la población está conformada por: Jueces, Fiscales, y Abogados litigantes; en un número de 7,000 colegiados en el Colegio de Abogados de Lambayeque; que han conocido procesos por algún delito cometido por organización criminal en el Distrito Judicial de Lambayeque.



#### **1.4.7. Muestra de Estudio**

Se aplicará un porcentaje del 3% del total de la población entre jueces, fiscales y abogados del Distrito Judicial de Lambayeque sobre la opinión de la Política Criminal empelada en la lucha contra la criminalidad organizada.

## **CAPITULO II: MARCO TEÓRICO**

### **SUB CAPITULO I: MODERNAS TENDENCIAS DEL DERECHO PENAL Y EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO**

#### **1. EI DERECHO PENAL**

El derecho penal aparece como un medio de control social caracterizado por su formalización. Esta tiene lugar mediante la vinculación a normas y tiene por objeto limitar la intervención penal en atención a los derechos del individuo objeto de control (MIR PUIG, en BUSTOS RAMÍREZ, 1995, p, 54).

Por su parte, HASSEMER citado por BUSTOS RAMÍREZ, señala que:

El derecho penal no actúa aisladamente, sino más bien dentro de control social, cuyo ámbito parcial formalizado es el derecho penal (1995, p, 105).

VON BELING (2002) refiere que:

El derecho penal (*jus criminak, jus pccnale*, derecho punitivo) es el conjunto de preceptos jurídicos por medio de los cuales se determina cuándo, cómo y bajo qué condiciones previas debe alguien sufrir una pena. De este modo concebido el derecho penal (regulación de la "punibilidad", como contenido de una "pretensión (acción) punitiva" que tiene un titular contra el obligado a someterse a la pena, diferenciase de todas las otras partes del derecho (p, 19).

Por su parte, MARQUEZ PIÑERO (2006) indica que:

En el frondoso árbol del derecho, cuyas normas son todas importantes, el Derecho penal ocupa un lugar preponderante, principalmente por tratarse de una parcela jurídica que afecta lo bienes indispensables para la convivencia social. En estas condiciones, todos los aspectos del desenvolvimiento del derecho penal

adquieren una relevancia especial, así el entorno sociológico, las bases culturales, las condiciones económicas, el sistema político en el que se ubica, todo ello influye y, a su vez es influido por las normas jurídico-penales. Asimismo, indica que para definir lo que constituye la esencia del derecho penal, hemos de señalar que es, ante todo, un conjunto de normas jurídicas que describen las conductas constitutivas de delitos, establecen las penas aplicables a las mismas, indican las medidas de seguridad y señalan las formas de su aplicación (13).

De otro lado, LUIGI FERRAJOLI, citado por BUSTOS RAMÍREZ (1995) presenta:

Como alternativa al derecho penal, cuatro posibles sistemas de control social: a) el sistema de control social-salvaje, b) el sistema de control estatal-salvaje, c) los sistemas de control social-disciplinario, y d) el sistema de control estatal disciplinario (p, 41).

BUSTOS RAMÍREZ (2004) precisa que:

El control social es el mecanismo mediante la cual se ejerce el control sobre la sociedad; señala también que si se intenta buscar diferencia entre el control social formal e informal se debe buscar en la naturaleza del órgano que ejerce el control social y no en los niveles de formalización e institucionalización de los mecanismos (p, 492).

El control social formal, señala STANLEY COHEN, citado por GARCÍA-PABLOS (2003) que:

Es el conjunto de formas organizadas en que la sociedad responde a los comportamientos de las personas que califica como desviados. Estas respuestas

se dan de distintas formas como el castigo, la disuasión, la justicia, etc. El comportamiento cuestionado por la sociedad es calificado como crimen, delincuencia o desviación. Las personas que realizan comportamientos desviados son vistas en la sociedad como monstruos, villanos, enfermos, etc. Por otro lado, las personas que responden a aquellos comportamientos habitualmente jueces, policías, psiquiatras, entre otras. Así, estos integran el control social reactivo que es la respuesta a la conducta desviada y que se subdivide en informal y formal. Por lo tanto, el control social formal, es la respuesta a la conducta desviada ya realizada y que se ejerce a través de instancias ad hoc que han sido concebidas para tal propósito como lo son la policía, los tribunales, la cárcel, etc. Sus medios son muy variados, pero siempre constituyen la violencia como instrumento esencial, por ello el derecho positivo contempla el modo preciso de actuar de estas instituciones (2003, p, 84).

Finalmente, compartimos el criterio asumido por VÁSQUEZ SOLÍS (2017) cuando refiere que:

El control social comprende aquellos mecanismos mediante los cuales la sociedad ejerce su dominio sobre los individuos que la componen, a fin de asegurar su estabilidad y supervivencia. El control social precisa los límites de la libertad humana en la sociedad, y es también un instrumento de enculturación y socialización de sus miembros (p, 336).

## 2. EL DERECHO PENAL DEL CIUDADANO.-

Se entiende por derecho penal del ciudadano a aquellas normas penales convencionales que van dirigidas a sancionar a una determinada persona en caso de que este la infrinja (JÍMENEZ CORONEL, 2017, p, 119).

La norma jurídica, el derecho, constituyen un modo de orientación de conductas sin las cuales la vida humana en sociedad no podría ser posible dado que esta solo es en tanto y en cuanto el Derecho tiene vigencia. No obstante, a pesar de tal diseño, surge un hecho que niega la vigencia del derecho y lleva intrínseca una comunicación simbólica dirigida hacia la sociedad según la cual sí es posible desautorizar una norma. Ese hecho es el delito, frente al cual surge, anteponiéndosele la pena, la que también es un hecho, pero un hecho que niega al delito y posee, al mismo tiempo, un contenido de comunicación: la negación del derecho por parte del autor es irrelevante, la norma sigue vigente y se mantiene la configuración de la sociedad (GUNTHER JAKOBS, 2003, p, 21-22).

**Función represiva y preventiva del derecho penal.-** El derecho penal cumple, por un lado, la misión de proteger a la sociedad mediante el castigo de transgresiones del derecho que ya han tenido lugar; posee, por ello, una naturaleza represiva pero, por otro, cumple asimismo la misión de una naturaleza preventiva. Sin embargo, la función represiva y preventiva del derecho penal no son opuestas, sino que deben ser entendidas de modo unitario: El derecho penal a través de la amenaza, imposición y ejecución de penas justas, tiene como finalidad evitar la comisión de futuras infracciones del derecho (prevención mediante represión)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Armin KAUFMANN, STRAFRECHTS DOGMATICA, pag. 264 SS; LENCKNER, STRAFE PAGS. 9 SS; ROXIN BRUND LAGEN PROBLEMEN PAG. 12 SS; el mismo ALLG. TEIL ISTRES NUM. 33 SS;

1.- El castigo mediante una pena de infracción del derecho ya acaecida de acuerdo con el principio de justicia distributiva, llega siempre, por su propia naturaleza demasiado tarde, pues la pena mira al pasado y no puede impedir que suceda el injusto cometido. Pero la **función represiva del derecho penal es necesaria** para poder conseguir la protección de la sociedad mediante la pena de un modo justo.<sup>2</sup> En la aplicación de una pena adecuada por la realización de una infracción del derecho, recibe la confirmación evidente de la inviolabilidad del ordenamiento jurídico. EL procedimiento judicial expresa inequívocamente, tanto para el autor como para la generalidad que el derecho se impone, aunque a veces con retraso y que se puede contar con que también lo hará en un futuro a través del cumplimiento de la función represiva de una forma moderada proporcionada y adecuada a la culpabilidad, el derecho penal desarrolla aquella “fuerza configuradora de las costumbres”<sup>3</sup> que convence al conjunto de la población de la autoridad del ordenamiento jurídico, alcanzando de esta forma el efecto preventivo al que se denomina “PREVENCION GENERAL” (VIB INFRA S 8 II3a) este efecto del derecho penal se consigue mediante la aprobación de disposiciones penales claras, accesibles a la comprensión de todos, que describan inequívocamente el contenido del desvalor de la acción prohibida, así como a través de circunstancias que agraven el hecho y la culpabilidad del autor orientadas a la determinación de la

---

RUDOLPH DER ZWICK Staalichen Strafrechts pag. 70 ss.; SHMIDHAUSER, VON Sinnder Strafe pag.74 ss, WESSELS, ALLG. Teil num. 6.

<sup>2</sup> DALLAS PEITRAGE, PAG. 4; STRATEN WERTH, Allg. Teil Num. 28 ss. Armin KAUFMANN, STRAFRECHTS DOGMATICA, pag.267 SE REMITE AQUÍ CON RAZÓN A KANT, PARA QUIEN LA pena persigue tanto la justicia como máxima moral, como la “racionalidad” como cometido político criminal.

<sup>3</sup> H. MAYER, STRAFRECH REFORM. PAG 15; ROXIN, BOCKELMAN – FESTSSHIFT PAGINA 306; MULDER /DIETZ JESCHKE – FESTSSHIFT TOMO II PAG. 817 SS; SCHULTZ, ZStW 92 (1980) pag. 631.

pena, que también sean comprensibles para el condenado y sean consideradas justas por la colectividad. De esta manera el mensaje del derecho penal alcanzan a sus destinatarios y requiere por supuesto de una información conscientemente responsable y real de los medios sobre la creación e imposición de las normas jurídico – penales. Pero también interviene de forma represiva el derecho penal cumple *siempre una función preventiva mediata* en cuanto a la protección de la sociedad: La pena justa es en interés de la colectividad un instrumento irrenunciable para el mantenimiento del orden social. Junto con la así llamada prevención general positiva (BV er GE, 45, 187 – 256)<sup>4</sup> juega la prevención general negativa que consiste en la disuasión de futuros autores por el temor que implica la pena (VI. INFRA 8II 3A ).

2.- Pero más allá el derecho penal tiene también que cumplir una **función preventiva inmediata**. Cada pena tiene que contribuir que el condenado consolide nuevamente su respeto al derecho ya que por su propia fuerza y convencimiento se conduzca por el camino del Ordenamiento. El recuerdo de la ejecución del menoscabo sufrido en la libertad, patrimonio o prestigio, debe servir al autor como advertencia para futuros hechos punibles. Además, la pena privativa de libertad debe servir cuanto menos para proteger temporalmente a la sociedad del delincuente peligroso (vid. S 2, INCISO 2°, StVollzG). El efecto preventivo que la pena desarrolla sobre el mismo reo se denomina “prevención especial” (vid. INFRA 8 II 3 B). AL efecto preventivo – especial, al que aspira la pena respecto al todo condenado, el derecho penal desarrolla funciones especiales frente a determinados

---

<sup>4</sup> JAKOBS, Allg TEIL 1/15 (Prevención General positiva como “Ejercicio de la confianza y la norma, fidelidad al derecho y reconocimiento de la norma”)

grupos de delincuentes: a) A menudo las acciones punibles son cometidas por delincuentes jóvenes (criminalidad juvenil). La comisión de hechos punibles leves es una manifestación normal en el desarrollo de personas jóvenes que superan esta fase por sí mismos<sup>5</sup>. Más peligrosa es, sin embargo, la criminalidad precoz<sup>6</sup>. Por criminales precoces se entiende los jóvenes (entre 14 y 17 años) y los semi adultos (entre 18 y 20 años) que ya en una edad infantil o juvenil sufrieron manifestaciones de abandono (escolarización irregular, interrupción temprana de las clases, incapacidad para desarrollar una profesión fija, cambios de vida inestables, consecuencias fugaces derivadas de la comisión de hechos punibles), que pueden ser síntomas precoces de una predisposición criminal. Numéricamente se calcula en un máximo del 15% de los jóvenes que delinquen, y se acepta que entorno a una cuarta parte de los criminales precoces vuelven a cometer hechos delictivos graves todavía en una edad adulta. El número de delitos grave y menos graves por los que han sido condenados jóvenes y semiadultos se ha ido incrementando progresivamente desde la mitad de los años 50. El derecho penal juvenil previene para los casos de criminalidad leve la omisión de la persecución de los hechos por parte del fiscal (S. 45 JGG), el archivo del proceso por parte del Juez (S 47 JGG), LA ADOPCIÓN de medidas educativas (S 9 JGG) y de internamiento (S 13 II JGG) mientras que para los supuestos de criminalidad grave se prevé la aplicación de una pena de prisión para menores (SS 17 SS. JGG). El

---

<sup>5</sup> SCHAFFESTEIN/BEULKE, Jugendstrafrecht PÁG. 5; con carácter general, HELMER, Jugencriminalidad pág. 71 ss.

<sup>6</sup> FREI, Der. FRUHKRIMINELE RUCKFALLVERBRECHER, 1951; MUNKWITZ, Die Prognose der Fruhkriminalität, 1967; SCHAFFESTEIN/BEULKE, Jugendstrafrecht PAG.6; HELLMER, DER Gewohnheitsverbrecher pág. 63.



DERECHO TUTELAR DE jóvenes prevé asimismo medidas de protección y auxilio (por ejemplo, orientación y asistencia educativa), asistencia personal a jornada completa, hogares infantiles, cuidado personalizado intensivo de carácter social y pedagógico, VID. S 28-35 SGB VIII sobre tutela de menores y jóvenes). No obstante, la pena de prisión para menores de duración indeterminada fue derogada por la 1. JGG A G D30 de agosto de 1990 (B GB 1 I 1990 PÁG. 1853)<sup>7</sup>. Se debe ser especialmente cauteloso con las sanciones del derecho juvenil que llevan asociadas la privación de libertad dado que pueden tener efectos muy negativos sobre el condenado<sup>8</sup>.

b) Una segunda función de carácter preventivo – especial destinada a evitar la comisión de delitos es la lucha contra la **criminalidad de reincidencia**<sup>9</sup>. Hay que distinguir dos clases de reincidentes: los habituales con una firme y enraizada inclinación a la criminalidad, y los delincuentes tendenciales con repetidos antecedentes que aunque están determinados por el desarrollo de su personalidad aún no lo están por su carrera delictiva. Para el segundo grupo, el S 48 en su antigua redacción preveía la supresión de la atenuación de la pena de prisión hasta los seis meses; pero esta previsión fue derogada por la 23. StAG del 13-04-1986 (BGB1- I PAG 393) al no dar buen resultado. Importante sigue siendo, no obstante, el hecho de que los antecedentes penales sean la causa más frecuente de agravación genérica de la

---

<sup>7</sup> Acerca de sus antecedentes históricos HEINZ, info 1/1989 pág. 7 ss.

<sup>8</sup> Sobre la ilusión del proceso penal a través de medidas de entretenimiento HEINZ, ZRP 1990, pág. 7 ss. CONCARACTER GENERAL SOBRE EL RECIENTE DESARROLLO CRIMINAL JUVENIL DJN Ed. GRUNDFRAGEN des JUGKRIMINALRECHTS, 1990; HEINZ, Jus 1991, 896. EN RELACIÓN A LA tutela de jóvenes Lauventhal, SPENDEL – Fetschrift pág. 795 ss. Acerca de su desarrollo internacional, SHULER – SPRINGORUM, ZStW104 (1992) PÁG. 169 SS.

<sup>9</sup> Sobre esta cuestión VID. MANNHEIM, HWK rim TOMO III, págs. 38 ss. ; KERNER, KLEINES CRIMINOLOGISC HES WORTEBUCH PÁG. 432; J. Meier, Strafrechtliche Aspekte des Rückfalls pág. 79 ss.; Kaiser CRIMINOLOGI, S 106.

pena. Preferente resulta, además, el planteamiento de que la repetida desobediencia a la ley debe ser castigada más gravemente por motivos de justicia y de prevención general; por el contrario, desde una perspectiva – especial, las penas privativas de libertad de larga duración no pueden tener ningún efecto positivo. Para delincuentes tendenciales peligrosos, el s 66 establece una custodia de seguridad de duración indeterminada. No obstante, esta última es aplicada en contadas ocasiones puesto que los tribunales consideran injusto alargar la pena privativa de la libertad más allá del marco punitivo merecido (VID. INFRA COMPULSIVA S 5 V 2) <sup>10</sup>

El derecho penal del ciudadano definiría y sancionaría los injustos penales que son perpetrados por los “ciudadanos” en forma incidental, es decir, los comportamientos antijurídicos que son expresión de una simple extralimitación de los ámbitos de libertad que subyacen al estatus de “persona” o “ciudadano” en el contexto social y dentro del derecho (GÜNTHER JAKOBS, 1997, p, 299).

La persona es considerada como tal en tanto es destinataria de derecho y deberes que la norma jurídica le atribuye. La constitución de la sociedad (propiamente dicha) y la persona se dan a través de las normas (JAKOBS, 1996, p, 25).

No hay persona sin rol social. Y dicho rol social viene determinado normativamente. En la medida en que las personas se hallan vinculadas a través de normas, se dirige a ellas la expectativa de que su conducta será conforme a ella (expectativas normativas) (CHANJAN DOCUMENT, 2016, p, 266).

El profesor peruano REYES TELLO (2015), señala las siguientes características:

---

<sup>10</sup> Con carácter general en torno al tema de la reincidencia ZIPF, GRUMSATZE, pág. 84.

- a) La configuración de los injustos penales, por regla general, giraría en torno a la ejecución de comportamientos que menoscaban bienes jurídicos o quebrantan las normas jurídico-penales vigentes. Lo cual significaría que los actos preparatorios están exentos de la intervención penal.
- b) Las penas estarían sujetas al principio de proporcionalidad, tanto a nivel abstracto como concreto, tanto en el quantum como en la clase.
- c) Como reconocimiento de la dignidad humana, se respetarían los derechos y libertades fundamentales de todos los imputados. Procesados y sentenciados.
- d) La finalidad de dicho Derecho penal sería de naturaleza jurídica, porque su consecución se buscaría con y dentro del derecho (p, 350).

Finalmente, se tiene que el fin del derecho penal del ciudadano, también llamado derecho penal liberal u ordinario, sería la reafirmación o confirmación positiva del derecho. Dicho fin se conseguiría mediante la prevención de la realización de injustos penales, la cual, a su vez, se basaría en la afirmación positiva de las convicciones jurídicas fundamentales, de la conciencia moral de la norma o de una actitud de respeto hacia el derecho. Se dice que la poena es una reacción estatal ante hechos punibles, que, al mismo tiempo, aporta un apoyo o auxilio para la formación o fortalecimiento de la conciencia normativa social, esto es, la afirmación y aseguramiento de las normas fundamentales (REYES TELLO, 2015, p, 351).

### **3. EL DERECHO PENAL DE LA SEGURIDAD**

Estamos viendo en los últimos años una tendencia evolutiva del derecho penal inicialmente evolutiva del derecho penal inicialmente orientado a los principios, a un

derecho penal orientado a las consecuencias. Y paralelamente se observa una evolución de la libertad a la seguridad, en beneficio de esta última. Se sitúan en un primer plano conceptos tales como eficiencia, economía y seguridad, y se ensombrecen las garantías tradicionales del derecho penal, sus límites de intervención y sus elementos propios de personalidad, protección y cuidado desde la protección de los derechos humanos (MIR PUIG, 2017, p, 50).

En el derecho penal de la seguridad, en que se restringen garantías constitucionales en beneficio de la seguridad, podemos situar a instituciones como la prisión perpetua (en España, llamada prisión permanente revisable), en que apenas desempeña papel alguno la reinserción social al establecerse la posibilidad de revisión de tal pena y de la libertad del resto de la pena, hasta que se haya cumplido un mínimo de 25 años de privación de libertad efectiva que puede llegar a los 35 años en los delitos de terrorismo (MIR PUIG, 2017, p, 51-52).

Dentro del derecho penal de la seguridad, se sitúa a la llamada custodia de seguridad o la sicherungsverwahrung del derecho penal alemán, que es la medida de seguridad más restrictiva de derechos, de carácter esencialmente inocular privativa de libertad que se cumple acumulativamente tras el cumplimiento de la pena de prisión por parte de un sujeto imputable cuando se constata que entonces, el penado sigue siendo peligroso criminalmente, sin un pronóstico favorable de reinserción social. Con dicha medida se prolonga la privación de libertad impuesta a una persona imputable que haya sido condenada por la comisión de un delito de cierta gravedad (MIR PUIG, 2017, p, 52).

## **4. EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO**

### **4.1. Antecedentes.**

El derecho penal del enemigo es una teoría que fue difundida, en un primer momento, por el profesor Jakobs en una ponencia realizada en Frankfurt en 1985, en la que advirtió que en el código penal alemán se sancionaba conducta sin que se haya afectado algún bien jurídico como la vida, la salud, el patrimonio, entre otros. Esto es, había advertido un adelantamiento a la barrera de la punibilidad. Posteriormente con los hechos acaecidos el 11 de setiembre de 2001 en los Estados Unidos de Norteamérica, Jakobs (1999-2003) se refirió a estos acontecimientos como un ejemplo del derecho penal del enemigo, haciendo una distinción entre persona, señalando que los primeros son aquellos que ofrecen una garantía cognitiva suficiente de ser fieles al derecho, mientras que no despliega una seguridad cognitiva, por lo que el Estado debería apartarlo de la sociedad, pues vulneraría el derecho a la seguridad de las demás personas (JÍMENEZ CORONEL, 2016, p, 92).

La teoría del derecho penal del enemigo se ha venido desarrollando desde entonces, bien para cuestionarla y rechazarla por ser contraria a un Estado democrático y social de derecho, así como por mostrar un rechazo a los derechos humanos y a los derechos fundamentales. Sin embargo, existe una posición de la doctrina que la considera filosóficamente cuando se trata de analizar la realidad de un determinado espacio geográfico donde las normas ordinarias resultan blandas e ineficaces para combatir a una determinada clase de delincuencia. Es por ello que países con altos índices de criminalidad, por ejemplo, México, Brasil, Colombia,

etc., no han tenido mejor opción que promulgar paquetes normativos con la finalidad de combatir a determinado grupo de personas que actúan en contra del derecho, por ende en contra del Estado de derecho (JÍMENEZ CORONEL, 2016, p, 93-94).

El Perú no ha sido al cambio normativo del sistema penal y procesal penal que se ha venido dando en distintos países, pues en estos últimos años el Estado ha creado y modificado leyes penales con la finalidad de combatir el crimen organizado que viene azotando al colectivo. Específicamente en las principales ciudades del país como Lima, Trujillo, Chiclayo, etc., se observa a diario el incremento del sicariato, extorsión, secuestro, además de diversas conductas delictivas, las mismas que provienen de organizaciones criminales que cometen a su vez otras conductas delictivas como corrupción, lavado de activos, etc., por la sencilla razón de querer aparentar cierta legalidad dentro de la sociedad (JÍMENEZ CORONEL, 2016, p, 94).

#### **4.2.El Enemigo**

Antes de señalar que es enemigo, debemos entender qué es persona. En ese sentido, señala JÍMENEZ CORONEL (2016) que:

La persona es aquel individuo que actúa conforme al orden social y a las leyes establecidas de convivencia dentro del Estado, a diferencia del enemigo quien es un sujeto que actúa en forma discordante al derecho, y por ende al Estado, ostenta alta peligrosidad, no brindando seguridad cognitiva necesaria (p, 95).

El término enemigo del ordenamiento jurídico recuerda a los llamados extraños a la comunidad, a que se refería el proyecto nacionalsocialista sobre el tratamiento

de los extraños a la comunidad, del 17 de marzo de 1944, que nunca llegó a entrar en vigor, a pesar de preverse su entrada en vigor para el 1 de enero de 1945, siendo Edmund Mezger uno de sus principales artífices. Dicho proyecto se refería a los asociales y antisociales, es decir, en palabras del Dirigente del Ministerio de Justicia alemán de la época. Rietzsch, a un círculo de personas que se sustraen reiteradamente a sus deberes para con la comunidad. Pero quien se aleja tanto del fundamento de la comunidad popular, el mismo se despoja de sus derechos, se degrada al nivel de una persona de menor derecho. Pero en realidad, el proyecto nacionalsocialista se refería a todo “enemigo interno” del régimen nacionalsocialista (MIR PUIG, 2017, p, 51).

Por su parte, AGUILAR CABRERA (2014) señala que:

Jakobs advierte que el derecho penal del enemigo constituye el polo opuesto del ciudadano; se trata de dos polos dentro de un mismo contexto jurídico y rara vez aparecen en estado puro, de manera que en cada uno aparece el otro: la distinción radica en que el derecho penal del ciudadano está destinado a mantener la vigencia de la norma, a través de la imposición de una pena, frente a hechos delictivos cotidianos cometidos por ciudadanos; en tanto el derecho penal del enemigo está destinado a combatir peligros; cuyo fin principal es la seguridad cognitiva, optimizando bienes jurídicos (p, 205-206).

El profesor alemán Jakobs (2003), citado por JÍMENEZ CORONEL (2016) precisa que:

Existen diversas formas de comportamiento que contravienen al derecho, y por ende a la sociedad, que el enemigo puede realizar. En estos últimos años, el

aumento masivo de hechos delictivos a gran escala como el sicariato, el lavado de activos o el tráfico ilícito de drogas, son claros ejemplos de ello, mediante su incorporación a una organización (en el caso del terrorismo, en la criminalidad organizada, incluso ya en la conspiración para delinquir) se han apartado probablemente de manera duradera, al menos de modo decidido, del derecho, es decir, que no prestan la garantía cognitiva mínima que es necesaria para el tratamiento como persona (p, 97).

Las personas que infringen la ley niegan los derechos y libertades ajenos, consagrados en la Carta Política. Esta provee, precisamente, de un conjunto de derechos y libertades a todos los integrantes del Estado, pero debe hacerlo siempre que su conducta se adecúe a dichos preceptos, pues si lo vulneran, es decir, si infringen la constitución normativa de la sociedad, qué derechos podría asistirle a quien con su conducta restringe, menoscaba o trunca la vida de los demás (ARBULÚ RAMÍREZ, 2016, p, 361).

El enemigo es aquel sujeto o persona que actúa en forma discordante al derecho, y por ende al Estado, ostenta alta peligrosidad, no brindando seguridad cognitiva necesaria, dentro de ello se encuentran los miembros de las organizaciones criminales, terroristas, etc.

#### **4.3. Concepto**

Se parte de la existencia de dos diferentes derechos, uno ordinario aplicado a la persona, orientado a la consecución de los principios que rigen el Estado de Derecho y el otro, especial de neutralización hacia los enemigos que causan un



peligro latente hacia la convivencia social, que no supone el respeto total a los principios que rigen el ordenamiento jurídico y social. En ese sentido, el derecho penal del enemigo optimiza la protección de bienes jurídicos, a diferencia del derecho penal del ciudadano que optimiza las esferas de libertad. Es por esto que son diferentes los mecanismos que utiliza el Estado para poder asegurar cada bien jurídico. Esa así que el derecho penal del enemigo constituye una suerte de reacción frente a la posible inestabilidad que pueda causar las acciones de estos sujetos contra el Estado (JÍMENEZ CORONEL, 2016, p, 98).

En palabras de CHANJAN DOCUMENT (2016) el derecho penal del enemigo sería:

Uno de naturaleza excepcional, en el que la pena antes que cumplir una función de afirmación de la vigencia de la norma jurídica, cumple primordialmente una función de aseguramiento del ejercicio de los derechos personales. Al igual que el inimputable, el enemigo no comunica con su actuación, sobre él no recae expectativa normativa alguna, pero el Estado no puede renunciar a su deber de evitar futuros peligros para las personas (p, 267).

MAZUELSON COELLO, citado por JÍMENEZ CORONEL (2016) sintetiza la aplicación del derecho penal del enemigo en tres características centrales:

Incremento del ingreso del derecho penal a lo que podría llamarse una fase previa al hecho, incremento del nivel punitivo de las penas y disminución o supresión de las garantías procesales reguladoras de la intervención penal. En los casos de intervención del derecho penal del enemigo se demuestra que no opera una actitud contrafáctica de la pena, sino una adecuación del sistema propio del

fenómeno social; en efecto, la intervención penal se convierte en una adecuación fenomenológica a lo ocurrido, trata por todos los medios, principalmente a través del ejercicio del poder que ostenta el Estado, de instaurar un modelo de derecho penal excluyente y anti garantista (p, 99).

En consecuencia, en opinión de JÍMENEZ CORONEL (2016) el derecho penal del enemigo:

Constituye una reacción frente a la posible inestabilidad que puedan causar las acciones de los enemigos contra el Estado, de ahí que para protegerse el Estado de posibles conductas que podrían atentar contra su propia estructura, sanciona con penas a gran escala, fuertes, orientadas a proteger la seguridad de las demás personas que viven en sociedad (p, 99).

El mismo autor, precisa que en el Derecho Penal del enemigo se defiende la legitimidad de un tratamiento diferenciado por parte del Estado en contra de los individuos que pueden ser considerados un peligro para la comunidad. Son normas distintas a las convencionales que van a intervenir en el estadio previo de la conducta futura que realizará el individuo (JÍMENEZ CORONEL, 2017, p, 119).

## **5. CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO**

El derecho penal del enemigo no se coloca en el campo problemático de la medida diferenciada de las garantías; es decir, no representa un subsistema del más general sistema penal, legitimado sobre la base de un juicio de ponderación entre garantías y exigencias de tutela del todo coherente con el sistema constitucional. El derecho penal del enemigo presenta más bien algunas características estructurales propias: a) las cuales se revelan –en su esencia y en su máxima manifestación–

lógicamente incompatibles con la idea misma de derecho penal, b) como ha sido marcado por siglos de civilización jurídica. Sin embargo, lo que no excluye del todo que ciertas expresiones del derecho penal del enemigo históricamente hayan podido, a menudo, convivir con el sistema penal.

El profesor italiano FRANCESCO PALAZZO (2015) señala que las características que identifican al derecho penal del enemigo parecen ser fundamentalmente tres (p, 201-203):

#### **5.1.La pertenencia del autor a una categoría subjetiva asumida como criterio fundante de un especial tratamiento sancionatorio.**

La pertenencia a una determinada categoría subjetiva es el elemento constitutivo de aquella identidad del autor relevante a los fines de la relación del enemigo sobre el cual se funda la reacción sancionatoria. El enemigo es tal por la identidad que le confiere la pertenencia a una determinada categoría o grupo. Por consiguiente, determinante no es el cumplimiento de un particular acto ofensivo de un específico bien o valor, sino la contraposición enemiga entre dos sujetos, particulares o contruidos en entidades colectivas, sobre la base de una hostilidad que puede bien trascender el cumplimiento –pasado o futuro- de determinados actos perjudiciales. Por tanto, el criterio de individualización de la comunidad de identidad de pertenencia es extremadamente lejano o incluso liberado de la especificidad de darse sobre elementos identificatorios extremadamente diversos, genéricos e incluso irracionales. Entonces, ya sobre la base de esta primera característica identificadora el derecho penal del enemigo se revela extraño a la juridicidad.

## **5.2. La De-jurisdiccionalización del proceso de aplicación de la sanción.**

De hecho, aun cuando el objetivo sea aquel de la simple eliminación del sujeto, no subsiste más la necesidad de los caracteres propios de la jurisdicción. No es necesario un tercer sujeto, puesto que no existe más la exigencia de una mediación entre dos posiciones antagónicas, sino aquella de una eliminación recíproca. Se trata de verificar que el sujeto presente la calificación de enemigo, para proceder después a su tendencial eliminación. En concreto, el grado de “de-jurisdiccionalización del proceso puede ser diverso, pudiendo ir, por ejemplo, de la posibilidad del uso procesal de los resultados de las actividades de inteligencia desarrolladas por los servicios secretos hasta la constitución de órganos juzgantes creados por el poder ejecutivo.

## **5.3. La orientación de la sanción hacia la neutralización, la exclusión o incluso la eliminación del autor.**

La tercera y última característica identificadora del derecho penal del enemigo es dada por una respuesta del ordenamiento, que llamamos aún sancionadora, pero que en realidad tiende a la neutralización, a la exclusión o a la eliminación del enemigo, la exclusión radical del sujeto de los denominados beneficios carcelarios y la exorbitante desproporción de la sanción, completamente desvinculada de la objetiva gravedad del hecho ilícito.

Por otra parte, se tiene que las características identificadoras del derecho penal del enemigo aparecen incompatibles con la idea del derecho penal, y con la forma cómo esta se ha sedimentado en la historia y en el actual cuadro constitucional de

nuestros ordenamientos. Tal incompatibilidad es confrontada desde un punto de vista funcional, lógico e ideológico.

**a) Bajo el perfil funcional:** La función de orientación cultural de la norma penal y de confirmación de la autoridad de esta última por parte de la pena es completamente extraña al derecho penal del enemigo. En cambio, este último. En lugar de confirmar la autoridad de la norma violada, confirma más bien la capacidad del enemigo de poner en definitiva y radical discusión la norma; el derecho penal del enemigo presupone y confirma la capacidad del enemigo de autoexcluirse, con su propio acto unilateral, del horizonte del ordenamiento jurídico rechazado.

**b) Bajo el perfil lógico:** es verdaderamente radical la antítesis existente entre la idea de la responsabilidad y aquella voluntad de exclusión que anima, tanto al derecho penal del enemigo como al enemigo mismo. En cuanto, si la pena es concebida como un claro medio de eliminación (real o simbólico) del enemigo en razón de su pertenencia de identidad a una determinada categoría, entonces se niega radicalmente la idea misma de la responsabilidad por una elección de comportamiento. El concepto de responsabilidad presupone ciertamente la existencia de un conflicto de voluntad y de intereses aparecidos a través de la violación, pero implica sobre todo la idea de una sucesiva superación de este conflicto o mejor aún de mantenerlo al interior de un horizonte común en el cual las voluntades y los intereses están destinados a encontrar una coordinación si bien qué forzosa. Responsabilidad es en el fondo coexistencias en razón de un

bien común superior, mientras la perspectiva del enemigo es la de una recíproca exclusión en razón de una radical mors tua vita mea.

**c) Bajo el perfil ideológico:** El derecho penal del enemigo implica –como ha sido teorizado- la degradación del enemigo de persona humana a simple individuo, Si se tiene presente sobre la tendencia naturalmente expansiva del derecho penal del enemigo hacia nuevas categorías de enemigos, se tiene que esta progresiva degradación de seres humanos pone en crisis a la misma sociedad en su esencia de civilización solidaria fundada sobre el valor intangible de la dignidad humana. Ello sería más que suficiente para poner al derecho penal del enemigo fuera del cuadro de referencia de nuestras constituciones, que se fundan sobre la absolutez de la dignidad personal. Pero, más allá de eso, se pondría el ulterior problema de quién puede estar legitimado para efectuar concretamente esta operación de descalificación de los enemigos de personas a individuos.

## **6. DIFERENCIAS DEL DERECHO PENAL DEL CIUDADANO Y DEL ENEMIGO**

Ambos regímenes se diferencian por el tipo de función que, según cada cual, cumple la pena y, por otro lado, por el hecho de que los sujetos a quienes aquellos deben ser aplicados deben ser diferenciados.

Otra diferencia consiste en que mientras en el derecho penal del ciudadano se maneja por la idea del simbolismo de la pena, el derecho penal del enemigo se rige por una idea más práctica, esto es, la del aseguramiento. Con esta idea no se busca tanto el castigo de los delincuentes, sino más bien la de asegurar a la sociedad de un peligro inminente que pueda ser originado por un delito grave (JÍMENEZ CORONEL, 2017, p, 120).

Las diferencias no parten solo de las penas, sino también, y esto es lo fundamental, de los sujetos que las sufren. Así, se sostiene la tesis de que el derecho penal del ciudadano está orientado a aquellas personas que estén dispuestas a respetar la norma, incluso después de haberla contravenido y sufrido las consecuencias de su castigo. Al mismo tiempo el derecho penal del enemigo se orienta a aquellas personas que hayan demostrado un total rechazo de las reglas que rigen la sociedad, convirtiéndose así en un peligro para toda la comunidad, razón por la cual no pueden ser tratados de la misma manera en la que podrían ser tratados bajo el derecho penal del ciudadano, lo que justificaría un trato más severo y distinto contra ellos (JÍMENEZ CORONEL, 2017, p, 120).

Por nuestra parte, comprendemos que las diferencias entre el derecho penal del ciudadano y el derecho penal del enemigo son de carácter formal y doctrinaria, es decir que el primero de ellos apunta por el respeto de las normas de la ciudad para poder vivir en armonía e incluso se comprenden aquellas personas o ciudadanos que cometen un delito por primera vez y hasta reincidentes que no tienen la condición de ser enemigos de la sociedad, mientras que el derecho penal del enemigo consiste en comprender a la persona no como ciudadano que respeta las normas sino como un enemigo que está en contra de las normas y que pretende desestabilizar dicha armonía social, dentro de los enemigos de la sociedad están claramente comprendidos los terroristas, los miembros de las organizaciones criminales modernas, los que cometen delitos como tráfico de personas, hasta incluso funcionarios que pertenecen al crimen organizado.

## **7. ELEMENTOS DEL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO**

El derecho penal del enemigo presenta tres elementos (JÍMENEZ CORONEL, 2017, p, 120-121).

En primer lugar, la constatación de un amplio adelantamiento a la barrera de la punibilidad contra el enemigo, esto es, concibiendo el ordenamiento jurídico-penal como un orden prospectivo (punto de referencia: el hecho futuro), en el lugar de retrospectivo (punto de referencia: el hecho cometido).

En segundo lugar, las penas previstas pueden ser desproporcionadamente altas mientras que la anticipación de la barrera de punición no es tomada en cuenta para reducir en correspondencia la pena amenazada.

En tercer lugar, las garantías procesales son relativizadas e incluso suprimidas.

Por otra parte, debemos señalar que la aplicación del derecho penal del enemigo está dirigida únicamente a quien constituya un peligro para la comunidad, condición que sólo unos pocos delincuentes pueden cumplir con dicha condición. Así, la condición de “sujeto peligroso” bien puede ser atribuida por cuestiones de política criminal para determinadas delitos considerados sumamente dañinos como, por ejemplo, terrorismo, lavado de activos, narcotráfico, pandillaje, secuestros, minería ilegal o corrupción de funcionarios. Todos ellos realizables en el marco de una organización criminal (JÍMENEZ CORONEL, 2017, p, 121).



## **SUB CAPITULO II: LA POLÍTICA CRIMINAL.**

### **1. GENERALIDADES**

La política cotidiana es un clamor que demanda en todas partes la intervención de la pena pública y se caracteriza a través de dos tesis, señalando el profesor CANCIO MELÍA:

En primer lugar, la percepción social de los sucesos delictivos se reduce progresivamente a la perspectiva de la víctima: ya el tratamiento jurídico-dogmático de la figura de la víctima concreta muestra que se trata de un elemento extraordinariamente ambivalente en términos políticos criminales: se plantea un verdadero dilema victimológico, en el que la introducción de este factor oscila entre la retirada de la protección del poder público (privatización) que puede significar atribuirle responsabilidad y la desvaloración jurídico-penal de la conducta del autor que puede implicar colocar en primera línea de un supuesto de sufrimiento individual de la víctima.

En segundo lugar, existe consenso político y social en el discurso político-criminal expansivo, es un verdadero lugar común sostener que existe un amplísimo consenso social respecto de segmentos decisivos de la nueva legislación penal. El consenso se convierte en práctica unanimidad, en particular, en lo que se refiere a la regulación de las infracciones en materia de terrorismo. Parece claro, a grandes rasgos, que la población es favorable a reacciones firmes; pero es muy discutible que pueda darse por probada la existencia de ese pretendido consenso social respecto de concretas medidas o instituciones jurídico-penales. En este ámbito, parte de la utilización política del fenómeno criminal, entra en juego la propia

posición y dinámica de los medios de comunicación de masas, en particular de la televisión. En todo caso puede constatarse que la demanda indiscriminada de mayores y más efectivas penas ya no es un tabú político para nadie (p, 85-86).

## **2. CONCEPTO DE POLÍTICA CRIMINAL**

En materia de derecho penal es innegable que la lucha contra la delincuencia recibe un fuerte influjo político, lo que siguiendo a DÍEZ RIPOLLÉS, se manifiesta en tres hechos puntuales: primero, que la política criminal no refleja las sutilezas ideológicas de antaño; segundo, que son los actores políticos los que marcan la agenda de política criminal; y, tercero, que tanto las obligaciones internacionales como la experiencia foránea influyen decididamente en la configuración de la política criminal (En: ARBULÚ RAMPIREZ, 2016, p, 351).

BORJA JÍMENEZ (2008), entiende por política criminal:

Como un conjunto de técnicas y estrategias elaboradas y destinadas por los poderes públicos para hacer frente al fenómeno criminal. Esta utilizaría todos los medios que estuviesen a su alcance para combatir la criminalidad, pero encontraría su límite en el conjunto de garantías del ciudadano que postularía el derecho penal (p, 33).

El profesor español SILVA SÁNCHEZ indica que la política criminal es:

La manera como la colectividad reacciona organizadamente, frente a las acciones delictuosas que amenazan su cohesión o su desarrollo armónico. Siendo su tarea no sólo la descripción de la reacción social contra la delincuencia, sino también determinar los lineamientos que deberían seguirse a fin de lograr una mayor eficacia. Llegándose a considerar que la política criminal se presenta bajo dos aspectos

esenciales: 1°.- Como una disciplina o un método de observación y estudio de la reacción anticriminal; tal como es, efectivamente, practicada. 2°.- Como un arte o estrategia de lucha contra la delincuencia, destinada a erradicarla; y que resulta elaborada a partir de los datos y enseñanzas aportados por la observación objetiva (2000, p, 25).

El profesor nacional CÁCERES RUÍZ, proporciona el siguiente concepto de Política Criminal, estableciendo que:

Es una disciplina que ofrece a los poderes públicos diversas opciones científicas concretas y adecuadas para el eficaz control del crimen y las alternativas legales consiguientes, facilitando la recepción de las investigaciones criminológicas y su transformación en preceptos normativos (p, 13).

GUEVARA VÁSQUEZ (2018) señala que la política criminal:

Ha de generar un clima de convivencia social pacífica entre los ciudadanos, mediando el respeto irrestricto de los bienes jurídicos fundamentales; a tal efecto, ha de incidir en una respuesta punitiva, a todo aquel sujeto, que –dolosa o imprudentemente- lesione y/o ponga en peligro un bien jurídico tutelado; la concretización de la sanción penal en los casos concretos, no solo ha de reportar una utilidad a la persona del penado, sino también a la sociedad, reafirmando la vigencia fáctica de la norma (prevención general positiva) y restableciendo la paz social y jurídica (p, 322).

El profesor peruano VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ (2011), citando a JESCHECK señala que:

La política criminal se debe entender como el saber que se ocupa de cómo configurar el derecho penal de la forma más eficaz posible para que se pueda cumplir con su tarea de protección a la sociedad; se fija, por ello, en las causas del delito e intenta comprobar la eficacia de las sanciones penales, pondera los límites hasta donde puede extender el legislador el derecho penal para coartar lo menos posible la libertad y las garantías ciudadanas; además discute cómo deben redactarse los tipos penales de manera correcta y comprueba si el derecho penal material se ha construido de tal manera que pueda ser verificado y realizado en el proceso penal (p, 407).

***El profesor alemán CLAUS ROXIN (2008) establece que:***

La política criminal incluye los métodos adecuados, en sentido social, para la lucha contra el delito, es decir, la llamada misión social del derecho penal; mientras que al derecho penal, en el sentido jurídico de la palabra, debe corresponder la función liberal del Estado de derecho, asegurar la igualdad en la aplicación del derecho y la libertad individual frente al ataque del Leviathan, del Estado (p, 32-33).

En consecuencia, somos de opinión que la política criminal es el conjunto de técnicas y estrategias elaboradas, destinadas por los poderes públicos para hacer frente al fenómeno criminal, facilitando la recepción de las investigaciones criminológicas y su transformación en preceptos normativos, utilizando todos los medios necesarios y eficaces para hacer frente a la criminalidad con la finalidad de combatirla y controlarla que permiten el respeto y garantía de los derechos de los ciudadanos.

### **3. POLÍTICA CRIMINAL POR LA PREVENCIÓN FÁCTICA**

La fijación político-criminal por la prevención fáctica no se halla respaldada por la comprobación de los efectos reales de determinadas medidas penales. Esto es indicativo de que esta fundamentación permanece en la superficie, mientras que otros elementos decisivos de la evolución del discurso político-penal quedan latentes. Dicho en una frase: bajo la apariencia de la toma de medidas (dolorosas) pero eficaces, del discurso preventivista, en la realidad aparece el motor de la demonización como multiplicador social del derecho penal del enemigo. Este proceso de la identidad social mediante exclusión de determinadas categorías de sujetos, convertida en línea directriz del Derecho Penal, explica algunas de las características del proceso de internalización. En este sentido, sobre esta base es posible comprender la preeminencia del elemento colectivo en todos los ámbitos de la nueva política criminal: el mecanismo de categorización, de definición de un (amenazante) colectivo como enemigo solo funciona si se refiere a grupos de autores, no a individuos. También queda claro cómo es posible que sólo algunos de los factores de criminalidad transnacional ingresen verdaderamente en la agenda político-criminal, y otros no: solo aquellos segmentos de criminalidad que puedan identificarse como cometidos por categorías de sujetos amenazantes para la identidad social (CANCIO MELÍA, 2015, p, 90).

Por otro lado, se tiene que la necesidad de un castigo se formula como un grito del corazón o de la naturaleza indignada: en el peor de los asesinos, hay una cosa al menos que debe respetarse cuando se castiga: su humanidad. Llegará un día en el que este hombre, descubierto en el criminal, se convertirá en el blanco de la

intervención penal, en el objeto que pretende corregir y transformar, en el campo de toda una serie de ciencias y de prácticas extrañas –penitenciarias, criminológicas-. Pero no es de ningún modo en tanto tema de un saber positivo que se sustrae al hombre de la barbarie de los suplicios, sino como límite de derecho: frontera legítima del poder de castigar. No aquello sobre lo que tiene que obrar si quiere modificarlo, sino lo que debe dejar intacto para poder respetarlo (MICHEL FOUCAULT, 2010, p, 86).

Es decir se enraíza el principio de que no se deben aplicar más que castigos humanos a un delincuente que, sin embargo, puede muy bien ser un traidor y un monstruo. La razón de que la ley deba tratar ahora humanamente aquel que se halla fuera de la naturaleza (mientras que la justicia de antaño trataba de manera inhumana al fuera de la ley) no está en una humanidad profunda que el delincuente escondiera dentro de sí sino en la regulación necesaria de los efectos de poder. Esta racionalidad económica es la que debe proporcionar la pena y prescribir sus técnicas afinadas. Humanidad es el nombre respetuoso que se da a esta economía y a sus cálculos minuciosos. En cuestión de pena, el mínimo está ordenado por la humanidad y aconsejado por la política (MICHEL FOUCAULT, 2010, p, 86).

Finalmente, se tiene que toda Política criminal debe partir de cierta construcción teórica, desde cuyos postulados se eligen las medidas consideradas “adecuadas para la sociedad actual” (ejemplo: admitir o no la tortura como herramienta procesal, o la pena de muerte como sanción). Esto significa que las medidas políticas que se eligen para estructurar el sistema penal, sus códigos. Instituciones, cárceles y funcionarios, parten de ciertas ideas a las que, generalmente, se ha concedido rango

científico, o se pretende que lo posea. De entre las disciplinas sociales protagonistas de los programas político-criminales, probablemente la criminología sea la que tuvo, históricamente, el papel más destacado (CARLOS ELBERT, 2015, p, 333).

#### **4. CLASES DE POLÍTICA CRIMINAL**

##### **4.1. En el campo penal.**

La política criminal en el ámbito penal viene a constituir el conjunto de conocimientos y estrategias en la parte especial del derecho penal, sobre todo se refleja en la imposición de penas por cada delito comprendido en el ordenamiento penal, siendo que la norma jurídico-penal viene a recoger una realidad social, hechos que se suscitan en el mundo fenoménico, por lo que a través de una labor de política criminal, es el legislador quien da contenido a un comportamiento típico, penalizado en el comportamiento humano en relación con un determinado bien jurídico. El legislador toma en cuenta un hecho que se produce en las relaciones inter-humanas, portador de lesividad social para con el interés jurídico, y así procede a su acriminación; sin embargo, tal conducción humana puede estar ya acogida en una determinada tipificación legal, más la necesidad de expresar una simbología comunicativa hacia el colectivo incide en una propuesta sobrecriminalizadora (PEÑA-CABRERA FREYRE, 2017, n° 31, p, 81).

El máximo Intérprete de la Constitución Política, en la sentencia recaída en el expediente N° 2050-2002-AA/TC, del 16 de abril de 2003, en el fundamento jurídico N° 8, ha indicado que para penalizar conductas como su proceso (constitucional y legal) de su criminalización, se debe tener en cuenta los siguientes presupuestos en base al principio de legalidad: “Dicho principio comprende una doble garantía: la

primera, de orden material y alcance absoluto, tanto referida al ámbito estrictamente penal como al de las sanciones administrativas, refleja la especial trascendencia del principio de seguridad jurídica en dichos campos limitativos y supone la imperiosa necesidad de predeterminación normativa de las conductas infractoras y de las sanciones correspondientes, es decir, la existencia de preceptos jurídicos (*lex previa*) que permitan predecir con suficiente grado de certeza (*lex certa*) aquellas conductas y se sepa a qué atenerse en cuanto a la ajena responsabilidad y a la eventual sanción; la segunda, de carácter formal, relativa a la exigencia y existencia de una norma de adecuado rango y que ese Tribunal ha identificado como ley o norma con rango de ley”.

Las decisiones de Política Criminal en un orden democrático de derecho, esto es, su formulación en el plano de la ley penal deben ser fruto de una decisión debidamente razonada, en cuanto a filtros de selectividad, llevados a un ámbito de legitimación propio de sus principios limitadores, no hacerlo hace correr el riesgo de contravenirlos, lo cual propiciaría lineamientos legislativos desafortunados. Como bien se dice en la doctrina, los dos grandes criterios que debe inspirar la política criminal a la hora de adoptar decisiones sobre el control de la criminalidad, la creación de nuevas figuras delictivas o la elección de las medidas más adecuadas son, por un lado, la idea de justicia y, por otro, la de utilidad. Este es un predicado que no puede dejar de lado en cualquier reforma legal de la ley penal, sea por obra directa del legislador (PEÑA-CABRERA FREYRE, 2017, n° 31, p, 92-93).

La política criminal en el campo penal se encuentra orientada al endurecimiento o elevación en las penas, así como también en la criminalización, es decir



conductas que no eran delito ahora sí lo son, como por ejemplo los delitos de Femicidio, Marcaje o reglaje y sicariato; (artículos 108°-B, 317°-A, y 108-C° respectivamente); así como el delito de atentado contra las condiciones de seguridad en el trabajo (artículo 168°-A del CP) o el trabajo forzoso (artículo 168°-B del CP); precisando que lo opuesto es la descriminalización, es decir conductas que eran delitos ahora no lo son.

Así también la política criminal penal se orienta en la penalización de conductas, regulando en el ordenamiento penal a través de su positivización como por ejemplo el delito de atentado contra las condiciones de seguridad en el trabajo, la pena es de uno a cuatro años y de cuatro a ocho años (artículo 168°-A del CP) o el trabajo forzoso en el cual regula penas desde los seis a doce años y de veinte a veinticinco años (artículo 168°-B del CP). Asimismo, es necesario precisar a la despenalización, que es lo opuesto a la penalización, lo cual se refleja cuando se flexibiliza el rigor penal a través de la reducción de la cantidad del tiempo en cumplir las penas, y se opta por el derecho de gracia, la conmutación de penas o el indulto.

#### **4.2. En el campo procesal penal**

En este campo la política criminal se caracteriza por emplear el conjunto de conocimiento o estrategias para luchar y reducir la criminalidad desde el campo procesal penal como por ejemplo reducir los plazos para llevar a cabo las etapas del proceso penal, la aplicación de la celeridad procesal, o reducir las etapas procesales como lo que se produce en el denominado proceso penal inmediato.

En el campo procesal penal la política criminal se configura cuando se propone pactos o arreglos con los imputados como en el proceso de confesión sincera o en la colaboración eficaz, otros permitiendo concluir el proceso antes de emitir sentencia como lo es el proceso de terminación anticipada. A estos procesos se les denomina procesos especiales.

La política criminal en el campo procesal también se refleja en los siguientes aspectos:

- En la sobrecriminalización, en el entendido que exige la imposición de medidas de coerción penal como por ejemplo la prisión preventiva, lo que en la actualidad se viene dando, como bien lo ha dicho el Presidente del Poder Judicial Duberly Rodríguez que en la actualidad los jueces penales de cada cien procesos dictan en 90 de ellos la medida coercitiva de prisión preventiva, siendo que por su carácter excepcional debería emitirse en sólo diez de los cien procesos.
- En la penalización, se produce en la exigencia de emitir la comparecencia restringida en cualquier proceso o en procesos graves, cuando lo correcto sería la comparecencia simple.
- En la despenalización, se entiende lo opuesto a la anterior, por ejemplo formular en lo posible dictar las posibilidades para la comparecencia simple, formulando las limitaciones en la penalización para los menores de edad, o teniendo en cuenta la edad como los menores de 18 años o a los mayores de 65 años.

#### **4.3. En el ámbito penitenciario o post penal**

En el campo penitenciario la política criminal se refleja a través de la implementación de estrategias en acortar o ampliar el plazo de permanencia en un

establecimiento penitenciario, con la concesión, reducción o restricción de beneficios penitenciarios. Es por ello que se afirma que la finalidad es hacer todo lo posible por alojar más personas en prisión, como si esa fuese una solución real al problema. El arraigo cultural del castigo ha permitido la utilización indiscriminada de la inercia inquisitiva por parte del Estado; una cultura así ayuda a legitimar la represión que pocos o nulos beneficios colectivos ofrece (PENA-CABRERA FREYRE, 2016, t, 80, p, 35).

Este tipo de política criminal está orientada al campo post penal o penitenciario, es decir en la etapa de ejecución de penas, siendo que el ente encargado de su cumplimiento es el Instituto Nacional Penitenciario- INPE.

La política criminal en el campo penitenciario o post penal se refleja también a través de:

- La Penalización de conductas reflejada a través del encarcelamiento, es decir que por un determinado delito sólo corresponde la pena de privación de la libertad ambulatoria y por lo tanto termina recluso de manera inmediata en un establecimiento penitenciario. Se refleja con la limitación en la concesión de los beneficios penitenciarios ya sea de manera general para todos los delitos o para algunos delitos, como por ejemplo por los miembros de alguna organización criminal.
- La despenalización, reflejada a través de la excarcelación de conductas que por su tiempo o por afectar mínimamente el bien jurídico tutelado corresponde su excarcelación del condenado. Así también se refleja con la concesión de los beneficios penitenciarios para todos los delitos o mayor favorecimiento a brindar

los beneficios penitenciarios como equiparar un día de pena por un día de trabajo o educación como redención de pena.

- La sobrecriminalización con la eliminación total de beneficios penitenciarios como en los casos de violación sexual de menores o en casos de pertenecer a una organización criminal.

Esta política criminal se orienta a la dación o restricción de beneficios penitenciarios, es decir en el campo netamente penitenciario. Así tenemos:

## **5. LA SOBRECRIMINALIZACIÓN.**

El fenómeno de la criminalización es entendido como la facultad del legislador de punir aquellas conductas u omisiones que vulneran el orden social y que por las características que presentan deben ser erradicadas del entorno social.

A consecuencia de las elevados índices de criminalidad como el narcotráfico, delincuencia urbana, delincuencia económica, crimen organizado, se llegue en primera instancia a una criminalización o tipificación y en segunda instancia, se caiga en una sobrecriminalización que implica una sobre penalización, circunscribiéndose a ultra proteger bienes jurídicos de carácter personal-nucleares como la libertad individual, sexual, patrimonial, etc. Entonces, si hablamos de sobrecriminalización, nos remitimos a una figura que opera generando una representación penal excesiva en contra de quien ha vulnerado el estado de orden social, por lo que (sin prever las consecuencias sociales a futuro) se impone una sanción no proporcional al hecho cometido. (CARO CORIA y REYNA ALFARO, 2016, p, 138).

Por lo tanto somos de opinión que la sobrecriminalización viene a constituir en un primer momento la incorporación de la conducta antisocial en el ordenamiento penal,

es decir en el código penal y posteriormente la sobrecriminalización que comprende la elevación de la penas ya criminalizadas o mejor dicho aumentar el quantum de la pena por el delito ya fijada, esto debido a múltiples factores, como por ejemplo por las campañas publicitarias en contra de los delitos que son considerados graves debido a que afectan bienes jurídicos tutelados o por influencia de los políticos que por ganar votos se meten en el populismo para dicho fin, lo cual a nuestro modesto entender no resulta esto conveniente para el ordenamiento penal, ya que se eleva una pena no de manera adecuada como sería un estudio dogmático y jurisprudencial en cuanto al incremento de la pena, cuáles serían las ventajas y sus desventajas de dicho incremento.

## **6. POSICIÓN DE LA AUTORA**

Los lineamientos de la política criminal deben tomar nuevos rumbos en el sentido de reforzar y reformular la persecución penal de los delitos cometidos por cualquier persona u organización que cometa delincuencia violenta, siendo para ello observar a las instituciones jurídicas que se ocupan de ello, como el Consejo de Política Criminal estatal.

Compartimos la recomendación dada por el profesor español QUINTEROS OLIVARES (2015) cuando refiere que: hay que compartir criterios jurídicos mínimos y estrategias político-criminales, pero también hay que determinar la propia política penal y criminal, que si cumple con los parámetros compartidos (p, 224-225).

Ante contextos como el que aparece en nuestra realidad criminológica, la predisposición de las autoridades competentes será de reforzar la seguridad ciudadana, mediando la extensión aplicativa de las instituciones que suponen una

intromisión estatal a las libertades fundamentales, empero en esas circunstancias que debe imperar el gobierno de la razón y el derecho, según las máximas de un Estado constitucional de derecho. Así, debe regir también las conductas de los hombres, donde la medida, la prudencia y la razón deben guiar las decisiones de los seres humanos en la vida funcional y cotidiana, en franco respeto a los bienes jurídicos fundamentales del individuo (Guevara Vásquez, 2018, p, 325).

Finalmente, somos de opinión que la política criminal entendida como el conjunto de conocimientos tanto teóricos como sobre la realidad delincuencia que permite efectuar estrategias para luchar contra dicha criminalidad y tratar de controlarla y de reducirla, debe estar fundamentada a través de una lucha frontal no sólo en el endurecimiento de las penas, sino también en el empleo de las posiciones doctrinarias del derecho penal del enemigo pero apuntando también a la resocialización de dicho enemigo.

Estamos de acuerdo en el empleo de los fundamentos doctrinarios del derecho penal del enemigo pero este debe adecuarse a nuestra realidad nacional, efectuar un adecuado enfrentamiento contra la criminalidad organizada, el terrorismo y otros delitos que son realmente graves y muy lamentables para la sociedad, pero tampoco es necesario renunciar a toda posibilidad de que el enemigo no pueda resocializarse. Siendo por ello necesario, efectuar programas de capacitación educacional no sólo en los establecimientos penitenciarios, sino desde la infancia y niñez, no permitiendo que adultos enseñen a menores a delinquir, y organizar campañas de rescate de menores que pertenecen a las denominadas organizaciones criminales.

## **SUB CAPÍTULO III: LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA**

### **1. CONCEPTO DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA**

Según los investigadores el término criminalidad organizada comenzó a emplearse con carácter oficial a inicios de la segunda mitad del siglo pasado. Sin embargo su uso se fue socializando hacia mediados de los años ochenta, al extremo que en el presente dicha expresión se ha convertido en un vocablo polisémico y cuasi coloquial que no siempre representa el fenómeno delictivo que se quiere describir.

La Ley N° 30077, en su artículo 2.1 establece la siguiente definición: “se considera organización criminal a cualquier agrupación de tres o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que, con un carácter estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y directamente, de manera concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o más delitos graves señalados en el artículo 3° de la presente ley”.

Todas las formas de criminalidad (terrorismo actual, tráfico de drogas, tráfico de seres humanos) pertenecen al género nuevo del crimen organizado. Naturalmente que no se trata de que los delincuentes hayan descubierto que es mejor organizarse para cometer crímenes. Pero el crimen organizado de hoy es el producto de la suma y combinación de diversos elementos, teñidos todos por una aplicación de un exceso de inteligencia y de la extraordinaria capacidad de organización que dan todos los medios contemporáneos, tanto de movilidad y de comunicaciones como la capacidad del daño que el crimen organizado tiene, tanto se trate de operaciones

económicas, como de tráfico de sustancias ilegales o de armas. A su vez esa capacidad de daño que en la actualidad resulta disponible dota al crimen organizado de posibilidades inéditas hasta hoy (ARROYO ZAPATERO, 2015, p, 64-65).

QUINTERO OLIVARES (2015) refiere que la criminalidad organizada es entendida como:

Redes supranacionales dedicadas a delitos clásicos o a nuevas formas delictivas que hoy pueden beneficiarse de las técnicas de comunicación financiera y bancaria así como las tecnologías de la comunicación, disponiendo de considerables recursos que, a su vez, permiten la expansión de la corrupción. El dominio de recursos financieros no ha de ser confundido con la clásica criminalidad de cuello blanco, siguiendo el concepto de Sutherland, sino que se trata de recursos de la organización misma, y no de que el centro decisorio esté necesariamente en el mundo de los negocios, aunque eventualmente pueda coincidir (p, 223-224).

## **2. CARACTERÍSTICAS DEL CRIMEN ORGANIZADO**

Dentro de las características del crimen organizado, señala PRADO SALDARRIGA (2012) que:

Los grupos de trabajo adscritos a este organismo identifican como criminalidad organizada toda actividad delictiva en la cual se verifique la presencia concurrente de once indicadores, de los cuales los tres primeros tienen la condición de imprescindibles: a) la concurrencia de más de dos personas; b) la comisión de delitos graves; c) el ánimo de lucro; d) la distribución de tareas; e) la permanencia; f) el control interno; g) actividad internacional; h) empleo de violencia; i) uso de



estructuras comerciales o de negocios; j) blanqueo de dinero, y k) presión sobre el poder político (p 17-18).

Por su parte, PRIETO PALMA citado por PRADO SALDARRIAGA (2012) afirma que:

Las organizaciones criminales necesariamente deberán contar con cuatro elementos: el primero es la cúpula o dirigentes que son aquellas personas encargadas de la dirección, coordinación y supervisión de las diversas actividades criminales; los otros tres elementos soportan a este que se convierten en tres pilares fundamentales e indispensables ya que si falta alguno de ellos, no podemos hablar de delincuencia organizada. El primero es el pilar de la realización de los actos ilícitos o actividades primarias de la organización criminal; el segundo pilar está compuesto por las redes de protección de la organización criminal que aseguran la permanencia y funcionamiento o económico que es esencia el objetivo mismo de la organización criminal (p, 21-22).

CASAS RAMÍREZ (2017) señala las siguientes características:

- a) El elemento numérico (cualquier agrupación de tres o más personas). Determina el número mínimo con el que debe de contar cualquier organización criminal para considerarla como tal; es así que la Corte Suprema señala en su fundamento 7 del Acuerdo Plenario N° 08-2007, que la pluralidad de agentes es un componente básico de su existencia, más no de su actuación. Es decir, esta clase de agravante exige mínimamente que el agente individual o colectivo del delito sea siempre parte de una estructura criminal y actúe en ejecución de los designios de esta; por ello, un hecho delictivo puede ser ejecutado por una sola persona, pero

esta debe de pertenecer y actuar por designio de una organización criminal integrada por más de dos integrantes, toda vez que el número de personas determina su creación y vida, mas no la realización de hechos delictivos.

- b) La distribución (que se repartan diversas tareas o funciones). Determina que cada integrante de la organización criminal debe de cumplir alguna función en la misa o realizar alguna tarea determina dentro de ella, pero siempre teniéndose en cuenta que estas no deben de realizarse en forma individual sino por encargo de la organización criminal; todo ello con el fin de que el engranaje de la empresa criminal marche en forma adecuada. Debiendo entenderse como “tarea” aquella labor que por su objetivo y exigencia dentro de la organización criminal se efectúa para llevar con éxito una función que se realiza, correspondiéndole un tiempo corto en la ejecución de la misma, mientras que por “función” debe de entenderse, al conjunto de actividades genéricas que realizan los miembros de la organización criminal, de forma complementaria para conseguir el fin que esta tiene al realizar sus actividades (el lucro), pero en periodos más prolongados y en forma más esquemática.
- c) La estructura (cualquiera sea su estructura y ámbito de acción). Se puede plasmar mediante un organigrama interno donde se esquematiza a todos los miembros de la agrupación, en la cual cada integrante tiene una jerarquía determinada dentro de la misma. A su vez, la presente característica es la que permite viabilizar de una mejor manera la consecución de la característica precedente (la distribución de las tareas y funciones) dentro de la organización criminal, facilitando además la integración de los miembros de la organización así como de las actividades que

estos realizan dentro de la misma. Cabe precisar que en la actualidad no existe un único modelo estructural, toda vez que existen organizaciones con estructuras de tipo vertical y horizontal, así como rígidas y flexibles, cerradas y abiertas; dicha constitución de la estructura a la que se adscriban dependerá siempre de la finalidad que busquen, medios con los que cuenten y actividad delictiva a la que se dediquen.

- d) La permanencia (con carácter estable o por tiempo indefinido). Esta es la característica central que posee toda organización criminal, la cual permite diferenciarse de otras categorías jurídicas aparentemente similares por lo que se convierte en la principal entre todas las características que posee esta categoría jurídica; esta característica inherente e indisoluble a las organizaciones criminales determina que su constitución y continuidad sea indefinida en el tiempo.
- e) El concierto (se crea, existe o funciona, inequívoca y directamente, de manera concertada y coordinada). Determina que las labores a realizar por sus miembros sea de manera concertada y coordinada, con el propósito de armonizar sus actividades y lograr la finalidad del lucro que todas estas buscan; ha de precisarse que si la actividad criminal realizada no presenta ésta característica, sino que, por el contrario, es producto de la casualidad, ello devendría en la inexistencia de una organización criminal. Debiendo entenderse por concertar al acuerdo entre los miembros de la organización criminal sobre un asunto determinado, ya sea este sobre la realización de los hechos delictivos o sobre el fin de lucro que en sí mismo se busca, mientras que coordinar deberá entenderse como la disposición

ordenada de un conjunto de cosas de acuerdo con un método o sistema específico para la realización de los actos y/o fines de la organización criminal.

- f) El número y magnitud del delito (cometer uno o más delitos graves). Esta característica determina que el número mínimo de delitos a cometer por parte de una organización criminal para que sea considerada como tal, puede ser simplemente desde uno a más delitos. Mientras que respecto a su magnitud, estos deben ser delitos graves y no simples delitos menores, descartándose así también a las meras faltas.
- g) El fin de lucro. Esta característica si bien no está taxativamente incorporada a la precitada norma, la misma deriva de la doctrina, por ella se determina la finalidad esencial de las organizaciones criminales, las cuales a través de sus actividades lícitas e ilícitas buscan generar mayores ganancias económicas. Esta característica de real y concreta importancia permite separar del listado de delitos graves descritos en el artículo de la Ley N° 30077, al delito de terrorismo, toda vez que los grupos terroristas no buscan a través de sus actividades obtener en sí mismo algún lucro, sino tienen finalidades de tipo político, religioso o ideológico (p, 156-158).

### **3. DELITOS PROPIOS DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA.**

Un catálogo de delitos propios de la criminalidad organizada que excluya aquellos violentos y convencionales, siendo que estos delitos deben cumplir tres presupuestos. Por un lado deben representar prácticas productivas y de comercialización de bienes y servicios ilegales. Y, por otro lado, su realización debe de activar mercados o circuitos de circulación. Pero, además, su realización debe de

activar mercados o circuitos de circulación. Pero, además, su realización debe materializarse con la intervención directa de una organización criminal. Ahora bien, en este dominio los modelos legislativos y las posiciones de la doctrina tampoco son uniformes.

LÓPEZ BARJA DE QUIROGA (2001) incluye los siguientes:

Delitos financieros, el blanqueo de capitales, la trata de personas con fines de explotación sexual u otros fines, el tráfico de drogas, el tráfico de armas y explosivos, el tráfico de bienes procedentes de sustracción (como por ejemplo, obras de arte, vehículos, etc.), la corrupción (cohechos a funcionarios públicos, fraude de subvenciones, etc.), la falsificación de moneda, la inmigración ilegal, los delitos basados en alta tecnología (como la delincuencia informática), los delitos contra el medio ambiente de carácter grave) (p, 116).

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) incluye un catálogo de delitos de criminalidad organizada a los que califica, además, como transnacionales. Según este organismo se debe considerar como delitos de criminalidad organizada a las actividades ilícitas que se detallan:

Tráfico de drogas, tráfico de armas de fuego, trata de seres humanos, tráfico ilícito de inmigrantes, pornografía infantil, secuestro y extorsión, lavado de activos, falsificación, delitos contra la propiedad intelectual, contrabando, en especial de automóviles, tráfico de órganos (2013, p, 22-23).

El profesor nacional PRADO SALDARRIAGA (2016), en base a su experiencia criminológica nacional, construye el siguiente listado de delitos de criminalidad organizada:

Lavado de activos, trata de personas, inmigración ilegal, contrabando, tráfico de drogas e insumos químicos, tráfico de armas (convencionales y de destrucción masiva), tráfico de bienes robados (vehículos, obras de arte, patrimonio cultural, etc.), corrupción administrativa y privada, delitos de alta tecnología (delincuencia informática), delitos contra el medio ambiente (tala forestal ilegal, comercio de caza furtiva, minería ilegal, etc.), financiamiento del terrorismo (p, 62).

Finalmente, por nuestra parte opinamos que los delitos propios cometidos por la criminalidad organizada, son los que por conocimiento general nos enteramos, siendo que en el Perú se producen los delitos de robo agravado, hurto agravado, extorción, apropiación ilícita, generalmente los delitos contra el patrimonio, así también en la administración pública, corrupción de funcionarios, entre otros de rango internacional.

#### **4. CONCEPTO DE BANDA CRIMINAL**

El artículo 317-B del Código Penal regula el delito de banda criminal, mediante el cual se sanciona al agente que constituya o integra una unión de dos o más personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal dispuestas en el artículo 317°, tenga por finalidad o por objeto la comisión de delitos concertadamente.

El profesor PRADA SALDARRIAGA (2013) señala que:

Las bandas son organizaciones tradicionales y de menor importancia que las organizaciones criminales. Para la mayoría de expertos estas estructuras, mayormente amorfas, no constituyen parte de la criminalidad organizada por poseer

un modus operandi notorio y artesanal. Carecen de roles establecidos y de procesos de planificación complejos (p, 79).

Estamos frente a una banda criminal cuando falte por lo menos una de las siguientes características:

- Número mínimo de tres personas.
- Carácter estable, permanente o por tiempo indefinido.
- Reparto de tareas o funciones de manera organizada, concertada o coordinada.
- Propósito de cometer delitos.

Lo que definirá entonces si nos encontramos frente a una organización criminal o una banda criminal serán úes tanto la estructura organizacional y el carácter permanente. No obstante ello, lo que no especifica la norma es que nivel de estructura organizacional y qué tiempo de permanencia se requieren para diferenciarlas a ambas, y evitar que el operador jurídico lo haga intuitivamente (PÁUCAR CHAPPA, 2017, p, 32).

Un sector calificado de la doctrina advierte acertadamente que el radio de acción de las bandas criminales es local, pero en algunas ocasiones las bandas criminales actúan como instancias periféricas o asociadas a organizaciones de mayor jerarquía a las que ofrecen y brindan sus servicios, o con las cuales desarrollan negocios a menor escala para distribuir los bienes ilícitos que aquellas producen o comercializan (PÁUCAR CHAPPA, 2017, p, 33).

ZÚNIGA RODRÍGUEZ, al respecto señala que banda criminal es:

Una mera conexión de personas para la comisión de delitos, desde luego, con cierto grado de planificación y estabilidad que las distinga de la simple coautoría (2009, p, 233-234).

## **5. DIFERENCIAS DEL CRIMEN ORGANIZADO CON BANDA CRIMINAL**

En ambas existen las siguientes características: el elemento numérico (solo variando en el número mínimo de personas que se requiere), el concierto, el número y magnitud del delito y la finalidad de lucro.

Así también existen diferencias y que convierten en autónomas a las organizaciones criminales respecto de las bandas criminales, señala CASAS RAMÍREZ (2017):

1) la principal diferencia entre ambas es que en la banda criminal no existe la característica de la estructura, a diferencia de la organización criminal que es la que la fundamenta; y 2) respecto a la característica de distribución, esta se presenta en la organización criminal, mientras que en la banda criminal no aparece toda vez que los miembros actúan de manera más espontánea en la realización de sus hechos delictivos (p, 175).

En cuanto al aspecto numérico, se exige en las organizaciones criminales una participación mínima de tres personas, mientras que en las bandas criminales se exige la participación mínima de dos personas. Respecto a la permanencia, en la organización criminal, es constante, mientras que en la banda criminal es solo parcial, muy débil e incipiente. En cuanto al número y magnitud del delito, en las organizaciones criminales solo se pueden cometer delitos graves, mientras que en las bandas criminales se pueden cometer tantos delitos graves así como también



simples. En relación a la tipificación de los artículos 317-B, en el primero se ha colocado cuatro verbos rectores para la comisión del mismo (promover, organizar, constituir e integrar), mientras que en el segundo solo dos (constituir e integrar). Y en relación a la naturaleza del ente delictivo derivado de la tipificación de los artículos 317 y 317-B, respecto al primero se habla de una organización criminal, mientras que en el segundo de una unión (CASAS RAMÍREZ, 2017, p, 175-176).

## **6. EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO**

Hoy en día, este es uno de los delitos con mayor cabida, causante de gran miedo a la población. Tanto que en algunos sectores se exige la aplicación de la pena de muerte para estos delitos. Vivimos en un Estado caótico, sumido en la desesperación y la inseguridad. Por este motivo es que se han incluido, dentro de la legislación sobre estos delitos. Ciertos tipos penales con el objetivo de neutralizarlos, como por ejemplo las normas:

La Ley N° 30077, Ley contra el Crimen Organizado, que en su artículo 2° define y proporciona los criterios para determinar cuándo existe una organización criminal.

El Decreto Legislativo N° 1106, Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos, que en su artículo 3° explica cuando se configura el delito ya sea por el dinero o títulos valores de origen ilícitos.

En consecuencia, con estas normas orientadas a la lucha contra la criminalidad se puede apreciar la influencia notoria del derecho penal del enemigo, precisando que esta no debe estar dirigida a violar derechos humanos o fundamentales, sino que simplemente orientado al castigo con firmeza pero a la vez buscando la resocialización del autor del delito dentro de una organización criminal.

El Decreto Legislativo N° 1307 modifica el artículo 272° del Código procesal penal de 2004 (plazo de prisión preventiva), señalando que para los procesos de criminalidad organizada, el plazo de la prisión preventiva no durará más de treinta y seis meses (36), esta misma ley modifica también el artículo 274°, estableciendo a la letra que cuando concurra circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso y que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria, el plazo de la prisión preventiva podrá prolongarse ... c) para los procesos de criminalidad organizada hasta doce meses adicionales.

El Decreto Legislativo N° 1298 (plazo de la detención preliminar judicial), modifica por su parte el artículo 264°, y estipula que en los delitos cometidos por organizaciones criminales, la detención preliminar o la detención judicial por flagrancia puede durar un plazo máximo de diez días. Así el artículo 266.1° dispone que en los delitos cometidos por organizaciones criminales la detención judicial por flagrancia pueda durar hasta un plazo máximo de diez días

## **7. EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO EN EL MUNDO**

El derecho penal del enemigo parece ser la expresión y el resultado más vistoso de las deformaciones que el giro constitucional del derecho penal actual puede soportar bajo la presión de las nuevas formas de criminalidad y de las consiguientes exigencias represivas.

El derecho penal del enemigo es un espectro que se mueve desde hace ya un tiempo en el occidente jurídico. Este proviene de USA, donde ha encontrado sus más significativas concretizaciones prácticas, en particular después del 11 de

setiembre. En Europa especialmente en Alemania, España e Italia, ha encontrado eco, recibiendo en general una mala acogida pero beneficiándose del mismo modo de una especie de racionalización teórico-científica. En todo caso, el enemigo del cual se habla en Norte América y en Europa es un enemigo externo, identificado por los demás en el terrorista internacional de origen islámico. En américa latina la consideración del derecho penal del enemigo ha asumido un carácter bastante menos teórico-científico que en Europa; orientándose, en cambio, hacia la clara contestación de su legitimización. Y ello es del todo comprensible, ya que en la cultura político-jurídica de Sudamérica el Derecho Penal del enemigo se asocia, no tanto a la idea de un instrumento contra el terrorismo internacional. Sino, más bien al recuerdo aún vivísimo de una arbitraria violencia político-institucional de los aparatos estatales dirigidos contra los opositores internos. Por un lado, en Europa y USA, el derecho penal del enemigo pretende ser el instrumento de la democracia que combate contra la antidemocraticidad de los terroristas que viene de oriente. Por el otro, en América Latina, el derecho penal del enemigo es el arma blandida por las dictaduras y por los regímenes antidemocráticos contra los opositores democráticos internos (FRANCESCO PALAZZO, 2015, p, 196-197).

## **8. NORMAS EN LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA**

En la actualidad, señala PRADO SALDARRIAGA (2013) que en efecto es innegable:

Que al interior de la sociedad peruana y de la interacción cotidiana de sus actores, confluyen de manera aleatoria y transversal manifestaciones activas o latentes de criminalidad organizada violencia dedicad, sobre todo, a delitos tradicionales como el

robo, el secuestro o la extorsión, con la silenciosa y encubierta presencia operativa de modalidades de criminalidad organizada no convencional y sofisticada como el lavado de activos, la minería ilegal o la trata de personas (p, 81).

En nuestro país como es de público conocimiento la norma que busca la lucha contra la criminalidad organizada es la Ley N° 30077 y que tiene acercamiento con el derecho penal del enemigo ha sido un avance necesario pero insuficiente para enfrentar la delincuencia. Necesario porque el crimen organizado debe combatirse con severidad, entre otras razones porque sus integrantes están lo suficientemente integrados en la sociedad y, a pesar de esto, cometen delitos. Insuficiente, porque solo se reduce al crimen organizado, cuando debería extenderse a otros supuestos de criminalidad indispensable para reducirla y controlarla. El derecho penal del enemigo se pone de manifiesto, en la citada norma, en la prohibición de beneficios penitenciarios, la restricción del derecho a ser investigado en un plazo razonable, la afectación del principio de la carga de la prueba, del principio de inmediación, el mayor rigor en la aplicación de la pena, la vulneración de los criterios para la determinación de la competencia y la duplicidad del plazo de prescripción sin sustento constitucional (ARBULÚ RAMÍREZ, 2016, p, 359-360).

Ahora podemos afirmar que pese a que las penas para los delitos cometidos por el crimen organizado son muy elevadas, estos se vienen cometiendo con mayor incidencia debido a que las personas no toman en cuenta la pena sino el provecho económico que del delito pueden generar y mientras más y mejor es la ganancia económica mayor es el riesgo no interesa el quantum de pena.

El Código Procesal Penal contempla la utilización de herramientas destinadas a la búsqueda de pruebas, entre otras, el control de identidad policial, la video vigilancia, las pesquisas, la intervención corporal, el allanamiento, la exhibición forzosa y la incautación, la exhibición e incautación de actuaciones y documentos no privados, la interceptación e incautación postal, la intervención de comunicaciones y telecomunicaciones, el aseguramiento e incautación de documentos derivados, el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria, la circulación y entrega vigilada de bienes delictivos, el agente encubierto y operaciones encubiertas (ARBULÚ RAMÍREZ, 2016, p, 361).

## **9. POLÍTICA CRIMINAL DURANTE EL GOBIERNO 2011-2016**

Durante el gobierno anterior se promulgaron normas como:

### **a) Ley N° 30077, ley contra el crimen organizado, promulgada el 27 de julio de 2013.**

Esta ley posee una estructura normativa integral aunque poco sistemática. Esto es, reúne, a su interior, aunque con escasa claridad y orden, cinco clases de normas: programáticas, penales, procesales, de cooperación judicial internacional en materia penal y de ejecución penal. Además, complementa sus funciones y efectos con tres Disposiciones Complementarias Finales, cuatro Disposiciones Complementarias Transitorias y con seis Disposiciones Complementarias Modificatorias. Todas estas reglas de enlace son de importante repercusión para la praxis de las agencias estatales implicadas en la persecución y sanción de la criminalidad organizada, en tanto que, por ejemplo, no solo ponen en vigencia para el procedimiento de los integrantes de una organización criminal a las normas y

ritos del código procesal penal; sino que, también, otorgan competencia exclusiva y excluyente para la investigación y procesamiento de los delitos vinculados a organizaciones criminales a la Sala Penal Nacional del Poder Judicial, con el desconcertante agregado de que el financiamiento requerido para la implementación de tales competencias debe ser aportado por el presupuesto ordinario del sistema de justicia sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

- En cuanto a las normas programáticas los artículos 1°, 2° y 3° delimitan la función político criminal de la Ley N° 30077 y que no es otra de regular un estatuto especial para el procesamiento y sanción de los delitos realizados por organizaciones criminales o por sus órganos asociados o dependientes. Por lo demás, es una ley de clara orientación sobrecriminalizadora como lo demuestra sus artículos 22° (catálogo de circunstancias agravantes específicas), 24° (prohibición de concesión de beneficios penitenciarios) y primera disposición complementaria modificatoria (modifica artículo 80° del Código Penal in fine duplicando el plazo de prescripción de la acción penal para delitos cometidos por integrantes de una organización criminal e incrementa las penas para diversos delitos cuando estos sean sometidos por esta clase de agentes).
- Las disposiciones procesales (artículos 5° al 15°) o sobre cooperación judicial internacional en materia penal (artículos 26 al 30) son innecesarias en tanto que regulan aspectos ya contemplados por el Código procesal Penal, el cual, por lo demás, es puesto en vigencia integralmente para los delitos de criminalidad organizada (artículo 4°). En este dominio, por ejemplo, lo más

relevante se relaciona con la ampliación de los plazos para las diligencias preliminares que se elevan a sesenta días y se faculta al fiscal a discernir un límite distinto en atención a la complejidad del caso sub judice.

- En lo que atañe a reglas de derecho penal material, cabe destacar la incorporación al código penal, mediante la Segunda Disposición Complementaria y Modificatoria, del artículo 105°-A, que regula los criterios de determinación y fundamentación de la aplicación de consecuencias accesorias a personas jurídicas involucradas en la comisión, favorecimiento, facilitación o encubrimiento de un hecho punible. Por lo demás, reglas similares ya habían sido propuestas por el Anteproyecto de Código penal 2008/2010 y por el Acuerdo Plenario de la Corte Suprema de Justicia de la República N° 7-2009/CJ-116 del 13 de noviembre de 2009.

#### **b. La Ley N° 30262**

Ley que modifica el Código de ejecución Penal, la ley contra el Crimen Organizado, la ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, de fecha 06 de Noviembre de 2014, en su artículo segundo modifica el artículo 24° de la Ley N° 30077, Ley contra el Crimen Organizado, con respecto a la prohibición de beneficios penitenciarios se señala que “no pueden acceder a los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación, semi-libertad y liberación condicional: a) Si el agente es líder, jefe o cabecilla o ejerce funciones de administración, dirección y supervisión de una organización criminal; si el agente financia la organización criminal; y si el agente, en condición de integrante de la organización criminal o persona vinculada a ella o que actúa

por encargo de la misma, atenta contra la integridad física o psicológica de menores de edad u otros inimputables; y b) Los demás integrantes de la organización criminal, siempre que el delito por el que fueron condenados sea homicidio calificado; secuestro; trata de personas y agravantes; rufianismo o extorsión, de acuerdo a lo señalado en el Código Penal”.

Como se puede apreciar esta ley tiene una tendencia así como la influencia de las posiciones doctrinarias del derecho penal del enemigo, pero debeos precisar que la elevación de las penas resulta muy desproporcional, porque es muy complicado porque renuncia a la posibilidad de reinsertar o resocializar al penado, siendo que la influencia del derecho penal del enemigo debe estar dirigida a sostener que la pena es muy merecida para el criminal pero con la tendencia a su resocialización.

#### **c. Ley N° 30076**

Ley que modifica el Código Penal, Código Procesal Penal, Código de Ejecución Penal y el Código de los Niños y Adolescentes y crea registros y protocolos con la finalidad de combatir la inseguridad ciudadana”, de fecha 19 de agosto de 2013, esta ley por ejemplo modificó el artículo 22° del Código penal, sobre la Responsabilidad restringida por la edad en la que excluye de la reducción prudencial la pena por la edad, precisando que: “(...) Está excluido el agente integrante de una organización criminal o que haya incurrido en delito de violación de la libertad sexual, homicidio calificado, homicidio calificado por la condición oficial del agente, feminicidio, extorsión, secuestro, robo agravado, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, terrorismo agravado, apología, atentado contra la seguridad



nacional, traición a la Patria u otro delito sancionado con pena privativa de libertad no menor de veinticinco años o cadena perpetua”.

Esta ley restringe un derecho como es el derecho fundamental a la igualdad, es decir el derecho a la igualdad ante la ley que tienen todas las personas de que se le va aplicar una ley para todos de tal manera que no se le discrimen desde la norma penal. De otro lado, esta norma también afecta el principio de proporcionalidad porque restringe el derecho a reducir la pena por el límite de la edad.

## **10. POLÍTICA CRIMINAL DURANTE EL GOBIERNO 2016-2018**

Dentro de estas normas con aplicación de la política criminal influenciada por el derecho penal del enemigo tenemos:

### **a) Decreto Legislativo N° 1244.**

Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el crimen organizado y la tenencia ilegal de armas, publicado el 29 de Octubre de 2016, que a través de su artículo 2° modifica el artículo 317° del Código Penal, en los siguientes términos:

“Artículo 317°.- Organización Criminal. El que promueva, organice, constituya, o integre una organización criminal de tres o más personas con carácter estable, permanente o por tiempo indefinido, que de manera organizada, concertada o coordinada, se repartan diversas tareas o funciones, destinada a cometer delitos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa, e inhabilitación conforme al artículo 36°, incisos 1), 2), 4) y 8). La pena

será no menor de quince ni mayor de veinte años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa, e inhabilitación conforme al artículo 36º, incisos 1), 2), 4) y 8) en los siguientes supuestos: Cuando el agente tuviese la condición de líder, jefe, financista o dirigente de la organización criminal. Cuando producto del accionar delictivo de la organización criminal, cualquiera de sus miembros causa la muerte de una persona o le causa lesiones graves a su integridad física o mental”.

**b) Ley N° 30558.**

Ley de reforma del literal F, del inciso 24 del artículo 2º de la Constitución Política del Perú, del 9 de mayo del 2017, señala que: “(...) Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. La detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones y, en todo caso, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas o en el término de la distancia. Estos plazos no se aplican en los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y a los delitos cometidos por organizaciones criminales. En tales casos las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término”.

Con esta modificatoria se desprende que ante la comisión de un delito penal, la persona puede estar detenida hasta por un límite de 48 horas en un

establecimiento policial, luego de ello la policía debe poner a disposición de la autoridad competente para su respectivo proceso.

**c) Decreto Legislativo N° 1351**

Decreto Legislativo que modifica el código penal a fin de fortalecer la seguridad ciudadana, publicada a los seis días del mes de enero del año 2017, a través de su artículo 2° modifica los artículos 25°, 57°, 58°, 64°, 102°, 105°, 128°, 196°-A, 301°, 304°, 307°-A, 320° y 321° del Código Penal. Artículo 25°.- Complicidad primaria y complicidad secundaria. El que, dolosamente, preste auxilio para la realización del hecho punible, sin el cual no se hubiere perpetrado, será reprimido con la pena prevista para el autor. A los que, de cualquier otro modo, hubieran dolosamente prestado asistencia se les disminuirá prudencialmente la pena. El cómplice siempre responde en referencia al hecho punible cometido por el autor, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad del tipo legal no concurren en él.”

El artículo 57°.- Requisitos. El juez puede suspender la ejecución de la pena siempre que se reúnan los requisitos siguientes: 1. Que la condena se refiera a pena privativa de libertad no mayor de cuatro años. 2. Que la naturaleza, modalidad del hecho punible, comportamiento procesal y la personalidad del agente, permitan inferir al juez que aquel no volverá a cometer un nuevo delito. El pronóstico favorable sobre la conducta futura del condenado que formule la autoridad judicial requiere de debida motivación. 3. Que el agente no tenga la condición de reincidente o habitual. El plazo de suspensión es de uno a tres años. La suspensión de la ejecución de la pena es inaplicable a los funcionarios

o servidores públicos condenados por cualquiera de los delitos dolosos previstos en los artículos 384, 387, segundo párrafo del artículo 389, 395, 396, 399, y 401 del Código.”

Así también, el “Artículo 196-A.- Estafa agravada. La pena será privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años y con noventa a doscientos días-multa, cuando la estafa: 1. Se cometa en agravio de menores de edad, personas con discapacidad, mujeres en estado de gravidez o adulto mayor. 2. Se realice con la participación de dos o más personas. 3. Se cometa en agravio de pluralidad de víctimas. 4. Se realice con ocasión de compra-venta de vehículos motorizados o bienes inmuebles. 5. Se realice para sustraer o acceder a los datos de tarjetas de ahorro o de crédito, emitidos por el sistema financiero o bancario. 6. Se realice con aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima.

**d) Ley N° 30556.**

Ley que modifica el artículo 204 formas agravadas del Código Penal. La Tercera Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N.º 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres y que dispone la creación de la autoridad para la reconstrucción con cambios, establece la modificación del artículo 204 — formas agravadas de usurpación, del Código Penal. En ese sentido, se dispone la incorporación del numeral 11 (cuando la usurpación se comete “sobre inmuebles en zonas declaradas de riesgo no mitigable” al artículo 204° del Código Penal.

En consecuencia el artículo queda redactado de la siguiente manera: Artículo 204. Formas agravadas de usurpación.- La pena privativa de libertad será no menor de cinco ni mayor de doce años e inhabilitación según corresponda, cuando la usurpación se comete:

1. Usando armas de fuego, explosivos o cualquier otro instrumento o sustancia peligrosos.
2. Con la intervención de dos o más personas.
3. Sobre inmueble reservado para fines habitacionales.
4. Sobre bienes del Estado o de comunidades campesinas o nativas, o sobre bienes destinados a servicios públicos o inmuebles, que integran el patrimonio cultural de la nación declarados por la entidad competente, o sobre las áreas naturales protegidas por el Estado.
5. Afectando la libre circulación en vías de comunicación.
6. Colocando hitos, cercos perimétricos, cercos vivos, paneles o anuncios, demarcaciones para lotizado, instalación de esteras, plásticos u otros materiales.
7. Abusando de su condición o cargo de funcionario, servidor público, de la función notarial o arbitral.
8. Sobre derechos de vía o localización de área otorgados para proyectos de inversión.
9. Utilizando documentos privados falsos o adulterados.
10. En su condición de representante de una asociación u otro tipo de organización, representante de persona jurídica o cualquier persona natural,

que entregue o acredite indebidamente documentos o valide actos de posesión de terrenos del Estado o de particulares.

11. Sobre inmuebles en zonas declaradas de riesgo no mitigable.

Será reprimido con la misma Pena el que organice, financie, facilite, fomenta, dirija, provoque o promueva la realización de usurpaciones de inmuebles de propiedad pública o privada”.

## **CAPITULO III: RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO**

### **3.1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS**

Con la finalidad de analizar y su posterior discusión de los datos obtenidos de la encuesta aplicada a Jueces, Fiscales y Abogados de la ciudad de Chiclayo, pertenecientes al Distrito Judicial de Lambayeque, se procedió a plasmar la información en cuadros estadísticos.

#### **3.1.1. Encuesta Aplicada a Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque.**

CUADRO N° 01: CONCEPTO DE DERECHO PENAL

GRÁFICO 1.

CUADRO N° 02: CONCEPTO DE CIUDADANO.

GRÁFICO 2.

CUADRO N° 03: DEFINICIÓN DE ENEMIGO.

GRÁFICO 3.

CUADRO N° 04: EL DERECHO PENAL DEL CIUDADANO.

GRÁFICO 4.

CUADRO N° 05: EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO

GRÁFICO 5.

CUADRO N° 06: CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO.

GRÁFICO 6.

CUADRO N° 07: CONCEPTUALIZACIÓN DE POLÍTICA CRIMINAL.

GRÁFICO 7.

CUADRO N° 08: LA POLÍTICA CRIMINAL EN EL ÁMBITO PENAL.

GRÁFICO 8.

CUADRO N° 09: LA POLÍTICA CRIMINAL BASADA EN LA PETICIÓN  
POPULAR

GRÁFICO 9.

CUADRO N° 10: PERSONAS CONSIDERADAS ENEMIGOS POR EL  
DERECHO PENAL DEL ENEMIGO.

GRÁFICO 10.

CUADRO N° 11: POLÍTICA CRIMINAL BASADA EN LOS FUNDAMENTOS  
DEL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO.

GRÁFICO 11.

CUADRO N° 12: EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO FRENTE A LA  
CRIMINALIDAD ORGANIZADA.

GRÁFICO 12.



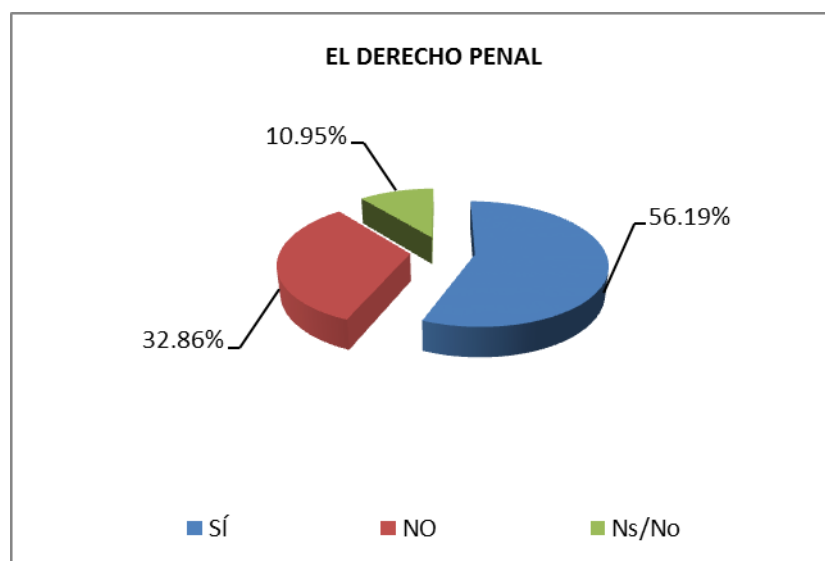
Total encuestados: 210 personas

**CUADRO N° 01 : CONCEPTO DE DERECHO PENAL**

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
1.- Considera que el Derecho Penal: ¿Aparece como un medio de control social caracterizado por su formalización. Esta tiene lugar mediante la vinculación a normas y tiene por objeto limitar la intervención penal en atención a los derechos del individuo objeto de control?	SÍ.	118	56.19%
	NO.	69	32.86%
	Ns/No.	23	32.27%
<b>T O T A L</b>		<b>210</b>	<b>100%</b>

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Marzo de 2018.

**GRÁFICO 1**



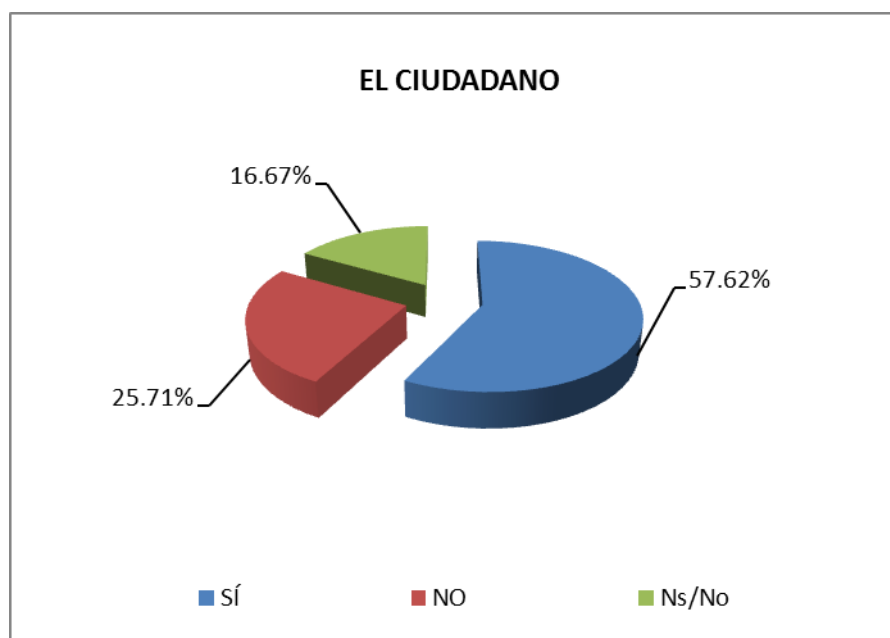
Total encuestados: 210 personas

**CUADRO N° 02 : CONCEPTO DE CIUDADANO**

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
2.- Según su conocimiento el ciudadano es: ¿la persona o individuo que actúa conforme al orden social y a las leyes establecidas de convivencia dentro del Estado, sin configurar ningún tipo de peligro, y están comprendidos aquellas personas que cometen algún delito sin ser considerado enemigo?	SÍ.	121	57.62%
	NO.	54	25.71%
	Ns/No.	35	16.67%
<b>T O T A L</b>		<b>210</b>	<b>100%</b>

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Marzo de 2018.

**GRÁFICO 02**



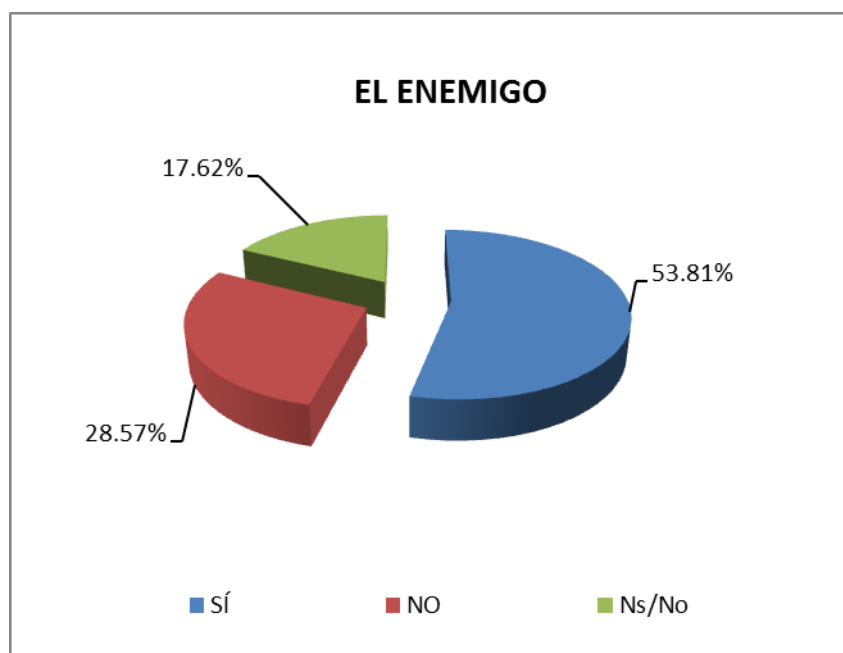
Total encuestados: 210 personas

### CUADRO N° 03: DEFINICIÓN DE ENEMIGO

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
3.- Le consultamos que el enemigo es: ¿Aquel sujeto o persona que actúa en forma discordante al derecho, y por ende al Estado, ostenta alta peligrosidad, no brindando seguridad cognitiva necesaria que no supone el respeto total a los principios que rigen el ordenamiento jurídico y social. Dentro de ello se encuentran los miembros de las organizaciones criminales, terroristas, etc.?	SÍ.	113	53.81%
	NO.	60	28.57%
	Ns/No.	37	17.62%
<b>T O T A L</b>		<b>210</b>	<b>100%</b>

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Marzo de 2018.

### GRÁFICO 03



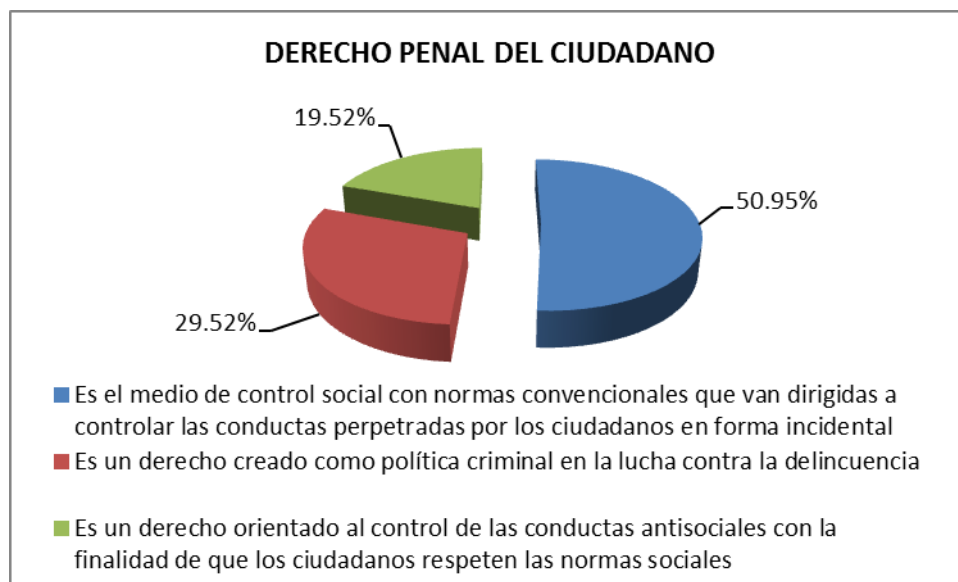
Total encuestados: 210 personas

**CUADRO N° 04: EL DERECHO PENAL DEL CIUDADANO**

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
4.- Dentro de los conceptos que a continuación se detallan ¿Cuál de ellos nos brinda una idea más cercana del derecho penal del ciudadano?	Es el medio de control social con normas convencionales que van dirigidas a controlar las conductas perpetradas por los ciudadanos en forma incidental	107	50.95%
	Es un derecho creado como política criminal en la lucha contra la delincuencia	62	29.52%
	Es un derecho orientado al control de las conductas antisociales con la finalidad de que los ciudadanos respeten las normas sociales	41	19.53%
<b>T O T A L</b>		<b>210</b>	<b>100%</b>

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Marzo de 2018.

**GRÁFICO 04**



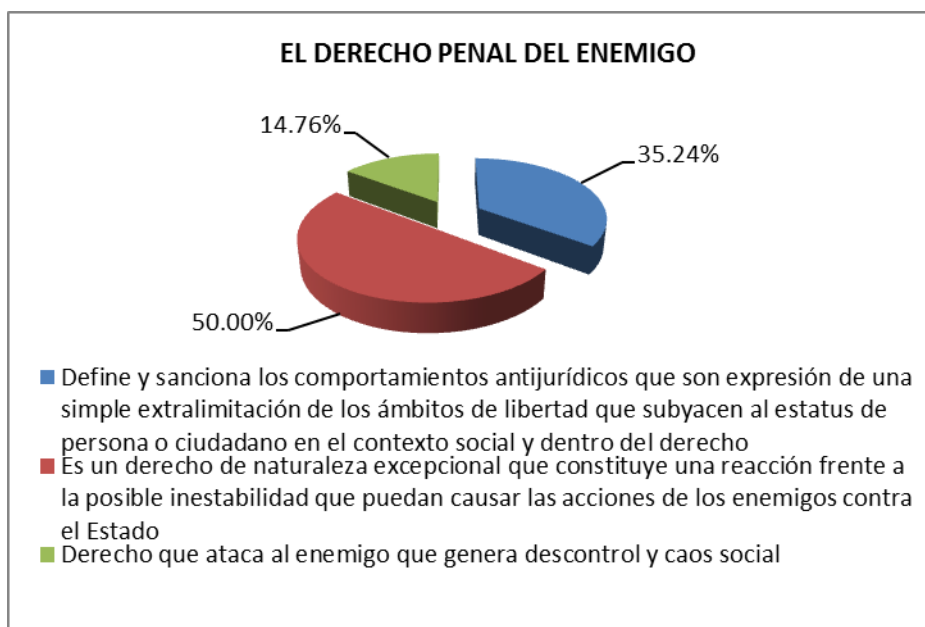
Total encuestados: 210 personas

**CUADRO N° 05: EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO**

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
5.- ¿Qué entendemos por Derecho Penal del Enemigo?	Define y sanciona los comportamientos antijurídicos que son expresión de una simple extralimitación de los ámbitos de libertad que subyacen al estatus de persona o ciudadano en el contexto social y dentro del derecho	74	35.24%
	Es un derecho de naturaleza excepcional que constituye una reacción frente a la posible inestabilidad que puedan causar las acciones de los enemigos contra el Estado	105	50.00%
	Derecho que ataca al enemigo que genera descontrol y caos social	31	14.76%
<b>T O T A L</b>		<b>210</b>	<b>100%</b>

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Marzo de 2018.

**GRÁFICO 05**



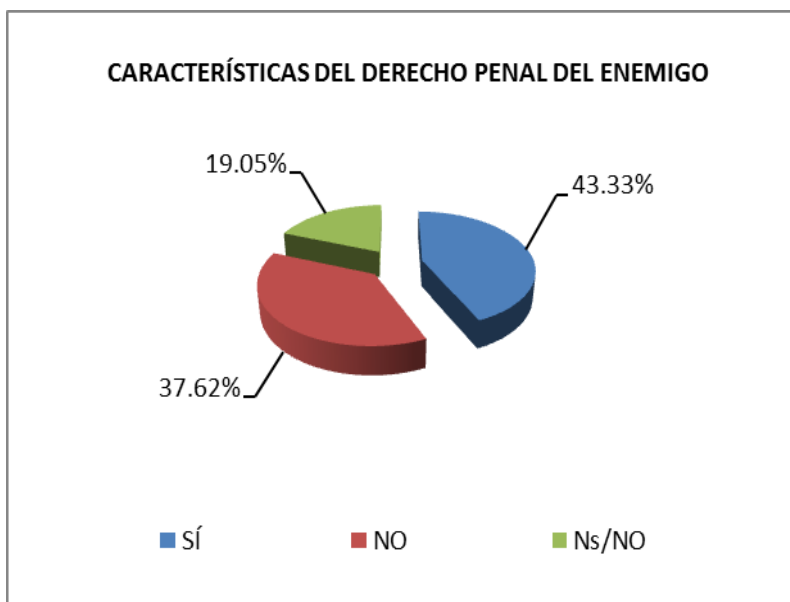
Total encuestados: 210 personas

**CUADRO N° 06: CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO**

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
6.- ¿El Derecho Penal tiene como característica fundamental la neutralización, la exclusión o eliminación del enemigo, la degradación de persona humana a simple individuo, la exclusión radical del sujeto de los denominados beneficios carcelarios y la exorbitante desproporción de la sanción, completamente desvinculada de la objetiva gravedad del hecho ilícito?	SÍ.	91	43.33%
	NO.	79	37.62%
	Ns/No.	40	19.05%
<b>T O T A L</b>		<b>210</b>	<b>100%</b>

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Marzo de 2018.

**GRÁFICO 06**



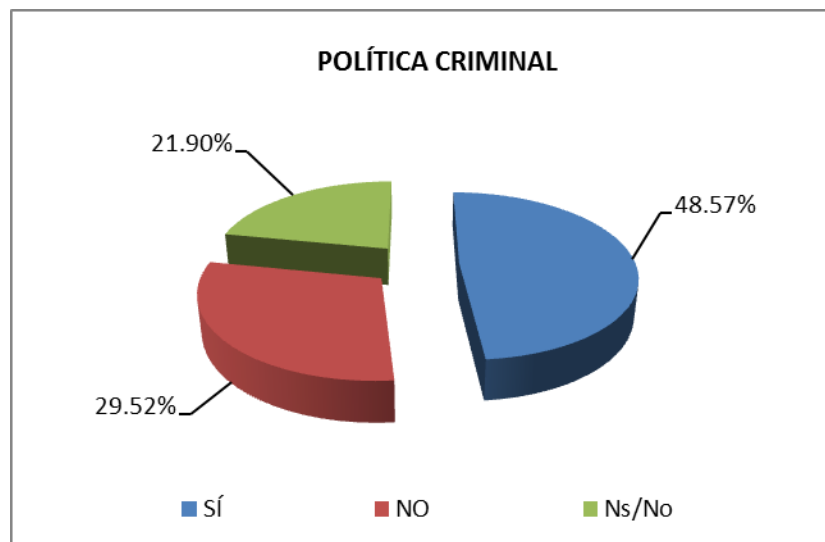
Total encuestados: 210 personas

**CUADRO N° 07: CONCEPTUALIZACIÓN DE POLÍTICA CRIMINAL**

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
7.- ¿La Política criminal, es entendida como el conjunto de técnicas y estrategias elaboradas, destinadas por los poderes públicos para hacer frente al fenómeno criminal, facilitando la recepción de las investigaciones criminológicas y su transformación en preceptos normativos, utilizando todos los medios necesarios y eficaces para hacer frente a la criminalidad con la finalidad de combatirla y controlarla que permiten el respeto y garantía de los derechos de los ciudadanos?	SÍ.	102	48.57%
	NO.	62	29.52%
	Ns/No.	46	21.91%
<b>T O T A L</b>		<b>210</b>	<b>100%</b>

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Marzo de 2018.

**GRÁFICO 07**



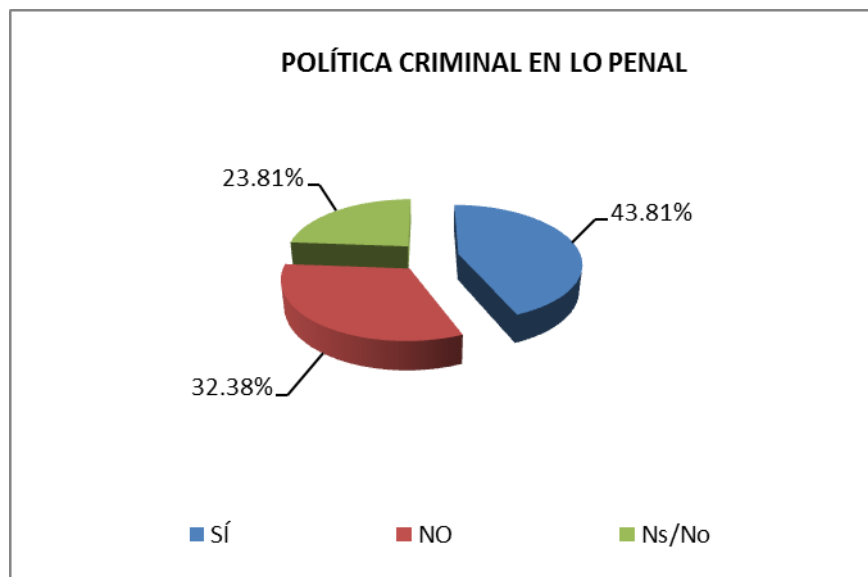
Total encuestados: 210 personas

**CUADRO N° 08: LA POLÍTICA CRIMINAL EN EL ÁMBITO PENAL**

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
8.- Dentro de las clases de política criminal, se tiene que: ¿la política criminal en el ámbito penal viene a constituir el conjunto de conocimientos y estrategias en la parte especial del derecho penal, reflejado en la imposición de penas y es el legislador quien da contenido a un comportamiento típico, penalizado en el comportamiento humano en relación con un determinado bien jurídico?	SÍ.	92	43.81%
	NO.	68	32.38%
	Ns/No.	50	23.81%
<b>T O T A L</b>		<b>210</b>	<b>100%</b>

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Marzo de 2018.

**GRÁFICO 08**





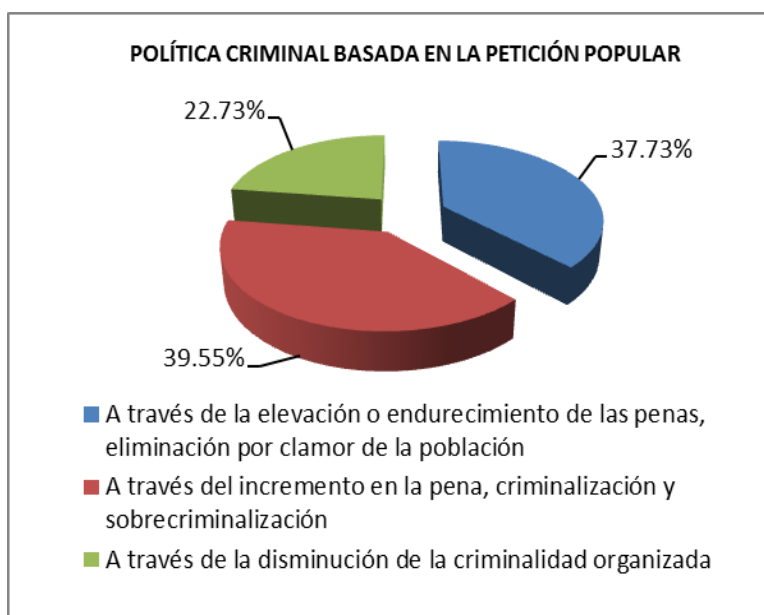
Total encuestados: 210 personas

**CUADRO N° 09: LA POLÍTICA CRIMINAL BASADA EN LA PETICIÓN POPULAR**

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
9.- ¿Considera que la política criminal en nuestro país dirigida a combatir y erradicar la delincuencia o la criminalidad refleja las influencias del derecho penal del enemigo:	A través de la elevación o endurecimiento de las penas, eliminación por clamor de la población	94	44.76%
	A través del incremento en la pena, criminalización y sobrecriminalización	74	35.24%
	A través de la disminución de la criminalidad organizada	42	20.00%
<b>T O T A L</b>		<b>210</b>	<b>100%</b>

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Marzo de 2018.

**GRÁFICO 09**



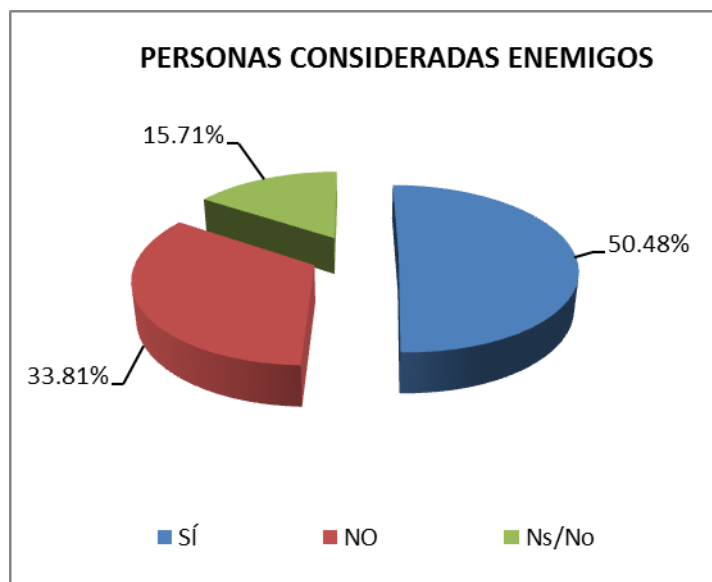
Total encuestados: 210 personas

**CUADRO N° 10: PERSONAS CONSIDERADAS ENEMIGOS POR EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO**

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
10.- ¿Considera que los enemigos son los que pretenden el caos e inestabilidad social y del Estado, los cuales vendrían a ser los terroristas, los narcotraficantes, los miembros y cabecillas de una organización criminal, los violadores, los secuestradores, etc.?	Sí.	106	50.48%
	NO.	71	33.81%
	Ns/No.	33	15.71%
<b>T O T A L</b>		<b>210</b>	<b>100%</b>

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Marzo de 2018.

**GRÁFICO 10**



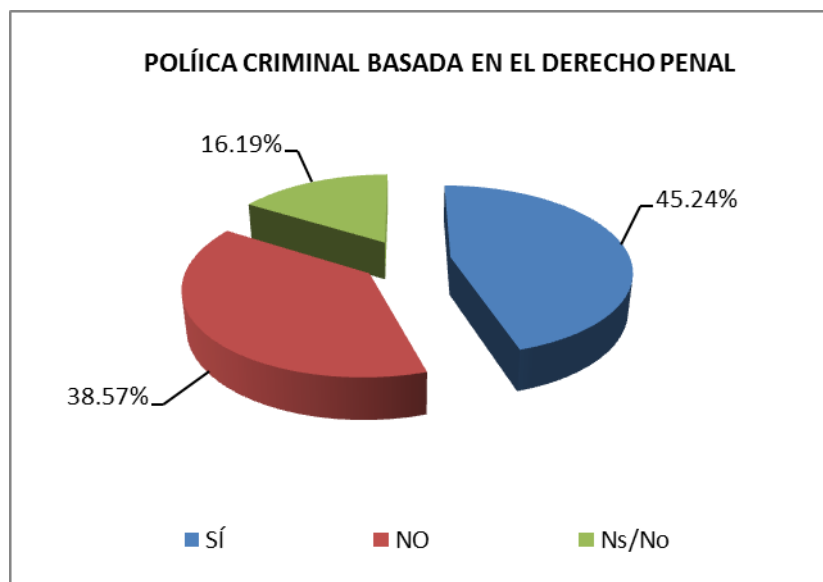
Total encuestados: 210 personas

**CUADRO N° 11: POLÍTICA CRIMINAL BASADA EN LOS FUNDAMENTOS DEL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO**

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
11.- Considera que una adecuada política criminal debe estar encaminada en base a: los fundamentos del derecho penal del enemigo como a la erradicación o eliminación del enemigo, con estrategias propias político-criminales, reforzando y reformulando la persecución penal de los delitos cometidos por persona u organización de manera violenta, pero buscando su resocialización?	Sí.	95	45.24%
	NO.	81	38.57%
	Ns/No.	34	16.19%
<b>T O T A L</b>		<b>210</b>	<b>100%</b>

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Marzo de 2018.

**GRÁFICO 11**



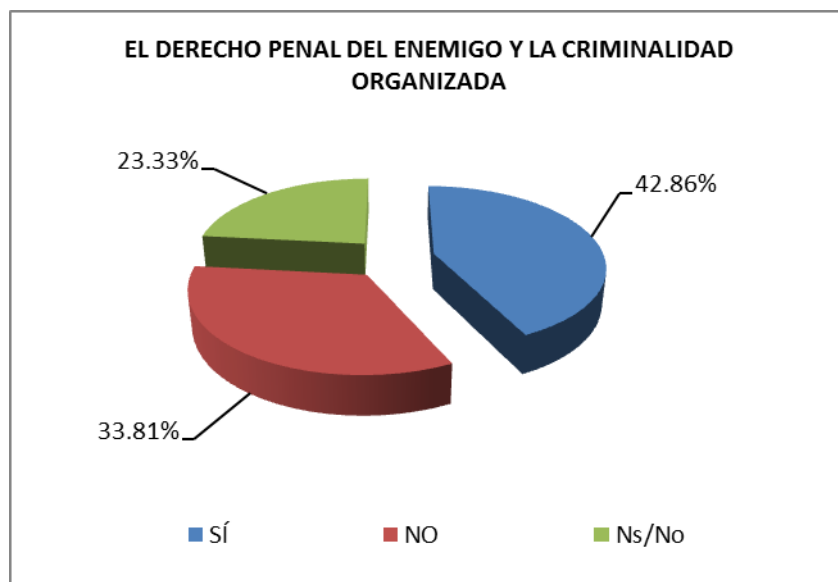
Total encuestados: 210 personas

**CUADRO N° 12: EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO FRENTE A LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA**

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
12.- Cree ud. que las normas contra la criminalidad organizada (N° 30077 y N° 30262) que imponen penas hasta de cadena perpetua y restringen beneficios penitenciarios que sigue de manera exagerada los fundamentos del derecho penal del enemigo, debe de cambiar y no vulnerar la dignidad de la persona tendiente a su resocialización?	Sí.	90	42.86%
	NO.	71	33.81%
	Ns/No.	49	23.33%
<b>T O T A L</b>		<b>210</b>	<b>100%</b>

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Marzo de 2018.

**GRÁFICO 12**



### 3.2. Análisis de los Resultados

La investigación para un mejor desarrollo y comprensión se estructuró en el grupo denominado: **“Encuesta Aplicada a Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque”**, el mismo que contiene doce cuadros, siendo que el primero de ellos denominado **“CUADRO N° 01: CONCEPTO DE DERECHO PENAL”**, contiene la interrogante sobre si considera que el Derecho Penal: ¿Aparece como un medio de control social caracterizado por su formalización. Esta tiene lugar mediante la vinculación a normas y tiene por objeto limitar la intervención penal en atención a los derechos del individuo objeto de control?, siendo que de un total de 210 encuestados entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, se tiene que para el 56.19% mayoritario conceptúa al derecho penal como aquel derecho que aparece como un medio de control social caracterizado por su formalización. Esta tiene lugar mediante la vinculación a normas y tiene por objeto limitar la intervención penal en atención a los derechos del individuo objeto de control, siendo que un 32.86% de ellos se mostró opositor a la definición mayoritaria; y el restante 10.95% restante prefirió reservar su opinión, ello también es demostrado con el GRÁFICO 1.

En el **“CUADRO N° 02: CONCEPTO DE CIUDADANO”**, atendiendo al conocimiento del encuestado se les consultó sobre el ciudadano: ¿la persona o individuo que actúa conforme al orden social y a las leyes establecidas de convivencia dentro del Estado, sin configurar ningún tipo de peligro, y están comprendidos aquellas personas que cometen algún delito sin ser considerado enemigo?, muestra que de un total de 210 personas encuestadas entre Jueces,

Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, para el 57.62% de los encuestados, entiendo por ciudadano como la persona o individuo que actúa conforme al orden social y a las leyes establecidas de convivencia dentro del Estado, sin configurar ningún tipo de peligro, y están comprendidos aquellas personas que cometen algún delito sin ser considerado enemigo, mostrándose opositor a ello un 25.71% de los encuestados y el restante 16.67% prefirió no emitir opinión alguna, corroborándose lo explicado con el GRÁFICO 2.

Del “**CUADRO N° 03: DEFINICIÓN DE ENEMIGO**”, ante la consulta a 210 encuestados entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque sobre el enemigo, el porcentaje predominante de los encuestados preciso que el enemigo es aquel sujeto o persona que actúa en forma discordante al derecho, y por ende al Estado, ostenta alta peligrosidad, no brindando seguridad cognitiva necesaria que no supone el respeto total a los principios que rigen el ordenamiento jurídico y social. Dentro de ello se encuentran los miembros de las organizaciones criminales, terroristas, etc., mientras que un 28.57% se mostró opositor a los indicado anteriormente y el otro 17.62% de los encuestados prefirió no responder a la consulta planteada, complementándose con el GRÁFICO 3.

Entre los temas a tratar en la presente investigación, es el Derecho Penal del Ciudadano, en tal sentido, el “**CUADRO N° 04: EL DERECHO PENAL DEL CIUDADANO**”, se presentaron varios conceptos sobre el derecho penal del ciudadano a 210 encuestados entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, indicando el 50.95% que es el medio de control social con normas convencionales que van dirigidas a controlar las conductas perpetradas por

los ciudadanos en forma incidental, por su parte para un 29.52% de los encuestados el derecho penal del ciudadano es un derecho creado como política criminal en la lucha contra la delincuencia y el restante 19.53% de ellos conceptualizó al derecho penal del ciudadano como un derecho orientado al control de las conductas antisociales con la finalidad de que los ciudadanos respeten las normas sociales. Lo dicho anteriormente se complementa con el GRÁFICO 4.

Del “**CUADRO N° 05: EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO**”, sobre lo que los encuestados entienden por derecho penal del enemigo, se desprende que de los 210 personas encuestadas entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, se tiene que para el 35.24% el derecho penal del enemigo sanciona los comportamientos antijurídicos que son expresión de una simple extralimitación de los ámbitos de libertad que subyacen al estatus de persona o ciudadano en el contexto social y dentro del derecho, mientras que el 50.00% mayoritario de los encuestados lo concibe como un derecho de naturaleza excepcional que constituye una reacción frente a la posible inestabilidad que puedan causar las acciones de los enemigos contra el Estado, y el restante 14.76% de ellos el derecho penal del enemigo es el derecho que ataca al enemigo que genera descontrol y caos social, corroborándose lo anteriormente dicho con el GRÁFICO 5.

Ahora bien, del “**CUADRO N° 06: CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO**”, que contiene la interrogante: ¿El Derecho Penal tiene como característica fundamental la neutralización, la exclusión o eliminación del enemigo, la degradación de persona humana a simple individuo, la exclusión

radical del sujeto de los denominados beneficios carcelarios y la exorbitante desproporción de la sanción, completamente desvinculada de la objetiva gravedad del hecho ilícito?, formulada a 210 encuestados entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, de donde se desprende que el 43.33% de los encuestados predominante considera que el Derecho Penal tiene como característica fundamental la neutralización, la exclusión o eliminación del enemigo, la degradación de persona humana a simple individuo, la exclusión radical del sujeto de los denominados beneficios carcelarios y la exorbitante desproporción de la sanción, completamente desvinculada de la objetiva gravedad del hecho ilícito, no considerándolo de esta manera un 37.62%, y el restante 19.05% de los encuestados no emitió opinión alguna. Lo expresado en este cuadro se corrobora con el GRÁFICO 6.

Otro tema abordado es sobre la Política Criminal, es por ello que del “**CUADRO N° 07: CONCEPTUALIZACIÓN DE POLÍTICA CRIMINAL**”, que contiene la pregunta: ¿La Política criminal, es entendida como el conjunto de técnicas y estrategias elaboradas, destinadas por los poderes públicos para hacer frente al fenómeno criminal, facilitando la recepción de las investigaciones criminológicas y su transformación en preceptos normativos, utilizando todos los medios necesarios y eficaces para hacer frente a la criminalidad con la finalidad de combatirla y controlarla que permiten el respeto y garantía de los derechos de los ciudadanos?, propuesta 210 encuestados entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, donde se desprende que para el 48.57% de los encuestados entiende por Política Criminal como el conjunto de técnicas y estrategias



elaboradas, destinadas por los poderes públicos para hacer frente al fenómeno criminal, facilitando la recepción de las investigaciones criminológicas y su transformación en preceptos normativos, utilizando todos los medios necesarios y eficaces para hacer frente a la criminalidad con la finalidad de combatirla y controlarla que permiten el respeto y garantía de los derechos de los ciudadanos, por su parte, un 29.52% resultó opinar contrariamente a la anterior y el otro 21.91% de ellos reservó su opinión, demostrándose todo ello con el GRÁFICO 7.

Acerca de las clases de la Política criminal, se tiene que el **“CUADRO N° 08: LA POLÍTICA CRIMINAL EN EL ÁMBITO PENAL”**, muestra los resultados sobre de la consulta: ¿la política criminal en el ámbito penal viene a constituir el conjunto de conocimientos y estrategias en la parte especial del derecho penal, reflejado en la imposición de penas y es el legislador quien da contenido a un comportamiento típico, penalizado en el comportamiento humano en relación con un determinado bien jurídico?, formulada a 210 encuestados entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, de donde se desprende que para el 43.81% la política criminal en el ámbito penal viene a constituir el conjunto de conocimientos y estrategias en la parte especial del derecho penal, reflejado en la imposición de penas y es el legislador quien da contenido a un comportamiento típico, penalizado en el comportamiento humano en relación con un determinado bien jurídico, mientras que para un 32.38% de los encuestados la política en el ámbito penal no constituye el conjunto de conocimientos y estrategias en la parte especial del derecho penal, y no se refleja en la imposición de penas y es el legislador quien da contenido a un comportamiento típico, penalizado en el comportamiento humano

en relación con un determinado bien jurídico: lo dicho anteriormente se corrobora con el GRÁFICO 8.

De otro lado, el **“CUADRO N° 09: LA POLÍTICA CRIMINAL BASADA EN LA PETICIÓN POPULAR”**, que contiene la pregunta: ¿Considera que la política criminal en nuestro país dirigida a combatir y erradicar la delincuencia o la criminalidad refleja las influencias del derecho penal del enemigo?, planteada a 210 encuestados entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, muestra que para el 44.76% mayoritario la Política Criminal se expresa a través de la elevación o endurecimiento de las penas, eliminación por clamor de la población, para un 35.24% señaló que es a través del incremento en la pena, criminalización y sobrecriminalización, y el 20.00% restante señaló que la política criminal se expresa a través de la disminución de la criminalidad organizada, lo cual queda acreditado con el GRÁFICO 9.

Por otro lado, el **“CUADRO N° 10: PERSONAS CONSIDERADAS ENEMIGOS POR EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO”**, que contiene la inquietud planteada a 210 encuestados entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque: ¿Considera que los enemigos son los que pretenden el caos e inestabilidad social y del Estado, los cuales vendrían a ser los terroristas, los narcotraficantes, los miembros y cabecillas de una organización criminal, los violadores, los secuestradores, etc.?, se desprende que para el 50.48% de los encuestados considera que los enemigos son los que pretenden el caos e inestabilidad social y del Estado, los cuales vendrían a ser los terroristas, los narcotraficantes, los miembros y cabecillas de una organización criminal, los

violadores, los secuestradores, etc., por el contrario el 33.81% de los encuestados no lo considera y el restante 15.71% de ellos eligió reservar su opinión, quedando verificado con el GRÁFICO 10.

Del **“CUADRO N° 11: POLÍTICA CRIMINAL BASADA EN LOS FUNDAMENTOS DEL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO”**, contiene la interrogante: ¿Considera que una adecuada política criminal debe estar encaminada en base a: los fundamentos del derecho penal del enemigo como a la erradicación o eliminación del enemigo, con estrategias propias político-criminales, reforzando y reformulando la persecución penal de los delitos cometidos por persona u organización de manera violenta, pero buscando su resocialización?, planteada a 210 personas como población muestral entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, la posición dominante, es decir el 45.24% considera que una adecuada política criminal debe estar encaminada en base a: los fundamentos del derecho penal del enemigo como a la erradicación o eliminación del enemigo, con estrategias propias político-criminales, reforzando y reformulando la persecución penal de los delitos cometidos por persona u organización de manera violenta, pero buscando su resocialización, mientras que un 38.57% de los encuestados mostro su oposición a lo anterior, y el restante 16.19% de los encuestados prefirió no emitir opinión valedera, quedando explicado todo lo señalado con el GRÁFICO 11.

Finalmente, del **“CUADRO N° 12: EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO FRENTE A LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA”**, que contiene la interrogante: ¿Cree ud. que las normas contra la criminalidad organizada (N° 30077 y N° 30262)

que imponen penas hasta de cadena perpetua y restringen beneficios penitenciarios que sigue de manera exagerada los fundamentos del derecho penal del enemigo, debe de cambiar y no vulnerar la dignidad de la persona tendiente a su resocialización?, consultada a 210 encuestados entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, muestra que para el 42.86% las normas contra la criminalidad organizada (N° 30077 y N° 30262) que imponen penas hasta de cadena perpetua y restringen beneficios penitenciarios que sigue de manera exagerada los fundamentos del derecho penal del enemigo, debe de cambiar y no vulnerar la dignidad de la persona tendiente a su resocialización, mientras que el 33.81% de los encuestados no lo considera de esa manera y el restante 23.33% de los encuestados prefirió no emitir opinión alguna. Lo dicho anteriormente se corrobora a través del GRÁFICO 12.

### **3.3. Contrastación de Hipótesis.**

La hipótesis formulada en el proyecto de investigación de la presente queda plenamente contrastada, confirmándola, en primer término con la opinión especializada de juristas nacionales y extranjeros quienes entienden, también que el Derecho Penal del enemigo busca erradicar o eliminar al enemigo de la sociedad y proteger al ciudadano, pero dicha eliminación del enemigo debe ser a través de una adecuada política criminal específica tendente a eliminar la criminalidad organizada a través de la imposición de penas de carácter elevado sin la influencia de pedidos populares y sobre todo buscando la resocialización del imputado.

## **CONCLUSIONES**

1. El crimen organizado viene a ser un conjunto de redes nacionales o supranacionales dedicados a delitos clásicos o nuevas formas delictivas que se benefician con las tecnologías de la comunicación que se dedican a generar caos y desestabilizar el orden estatal.
2. Los fundamentos jurídicos doctrinarios del Derecho Penal del enemigo tienden a la eliminación y erradicación del individuo identificado como enemigo pero a través de una adecuada política criminal basada en la resocialización del condenado.
3. La Política criminal es el conjunto de estrategias elaboradas para hacer frente a la delincuencia, precisando que en el gobierno anterior (2011-2016) y el gobierno de turno (2016-2020) la política criminal empujada contra la criminalidad organizada está basada en el pedido popular de imponer penas elevadas.
4. La implementación de una adecuada política criminal en la lucha contra la criminalidad debe estar formulada en base a estrategias propias político-criminales, reforzando y reformulando la persecución penal de los delitos cometidos por persona u organización de manera violenta, pero buscando su rehabilitación y si fuere posible su resocialización.

## RECOMENDACIONES

1. Efectuar campañas de difusión acerca de la política criminal a emplear en la lucha contra la criminalidad organizada pero atendiendo a los fundamentos jurídico-doctrinarios del derecho penal del enemigo como a la eliminación del individuo considerado enemigo.
2. Desarrollar una política criminal basada en las propias estrategias político-criminales, reforzando y reformulando la persecución penal de los delitos cometidos por persona u organización de manera violenta, pero buscando su resocialización, y no atendiendo al clamor popular que solicita penas elevadas para los delitos cometidos por el crimen organizado.
3. Del análisis de la Política criminal aplicada en el gobierno anterior (2011-2016) y el gobierno de turno (2016-2020) contra la criminalidad organizada se recomienda modificar los fundamentos doctrinarios, buscando eliminar o erradicar a los enemigos de la sociedad, mejorando la educación para todos los peruanos y buscando su rehabilitación y si fuere posible su resocialización, no aplicando penas elevadas para calmar el pedido popular.

## REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

### LIBROS

ABOSO, Gustavo Eduardo (2007). "Autoría mediata a través de un aparato organizado de poder. Semblanza de esta crítica forma de autoría mediata y las propuestas alternativas formuladas en la dogmática penal para el tratamiento de la criminalidad de los aparatos de poder penal para el tratamiento de la criminalidad de los aparatos de poder". En: Modernas Tendencias de Dogmática Penal y Política Criminal. Libro Homenaje al Dr. Juan Bustos Ramírez". José Urquiza Olaechea (Director). Editorial IDEMSA. Lima.

ACALE SÁNCHEZ, María (2015). "Respuesta penal frente a la criminalidad violenta desde las tinieblas del Derecho Penal ordinario". En: Dogmática Penal de Derecho Penal Económico y Política Criminal. Tomo II, Homenaje a Klaus Tiedemann. Segunda Edición. Editorial Gaceta Jurídica. Lima.

AGUILAR CABRERA, Denis (2014). "Derecho penal en la sociedad del riesgo: sobre la discusión en torno al derecho penal del enemigo y derecho penal funcional". Editorial Caballero Bustamante y Thomson Reuters. Lima.

ALBRECHT, Hans-Jorg (2001). "Criminalidad transnacional comercio de narcóticos y lavado de activos". Fondo Editorial de la Universidad Externado de Colombia. Bogotá.

ARROYO ZAPATERO, Luis (2015). "Política Criminal y Estado de Derecho en las sociedades contemporáneas". En: Dogmática Penal de Derecho Penal Económico y Política Criminal. Tomo II, Homenaje a Klaus Tiedemann. Segunda Edición. Editorial Gaceta Jurídica. Lima.

- BORJA JÍMENEZ, Emiliano (2003). "Curso de Política Criminal". Editorial Tirant Lo Blanch. Valencia.
- BRAMONT ARIAS, Luís y BRAMONT-ARIAS TORRES, Luís Alberto (1995). "*Código Penal Anotado*". Editorial San Marcos. Lima.
- BUSTOS RAMÍREZ, Juan (1995). "Prevención y teorías de la pena". Editorial Jurídica Conosur. Santiago de Chile.
- BUSTOS RAMÍREZ, Juan (2004). "Obras Completas". Tomo II: "Control Social y otros estudios". Editorial Ara Editores. Lima.
- CÁCERES JULCA, Roberto y LUNA HERNÁNDEZ, Luís A. (2016). "Comentarios a la Ley contra el crimen organizado". Editorial Jurista Editores. Lima.
- CÁCERES RUÍZ, Luís (2006). "Delitos contra el patrimonio. Aspectos Penales y criminológicos. Especial referencia a Badajoz". Editorial visión libros. Madrid.
- CANCIO MELÍA, Manuel (2015). "Internacionalización del Derecho Penal y de la Política Criminal: Algunas reflexiones sobre la lucha jurídico-penal contra el terrorismo". En: Dogmática Penal de Derecho Penal Económico y Política Criminal. Tomo II, Homenaje a Klaus Tiedemann. Segunda Edición. Editorial Gaceta Jurídica. Lima.
- CARO CORIA, Dino Carlos y REYNA ALFARO, Luis Miguel (2016). "Derecho Penal económico. Parte General". Tomo 1. Editorial Jurista Editores
- CASTILLO CÓRDOVA, Luís (2005). "*Los Derechos Constitucionales. Elementos para una teoría general*". Editorial Palestra. Lima.
- DIÁZ ARANDA, Enrique; GIMBERNAT ORDEIG, Enrique; JAGUER, Christian y ROXÍN, Claus (2002). "Problemas Fundamentales de Política Criminal y Derecho



- Penal". Editorial del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. México.
- FERRAJOLI, Luigi (2004). "Derechos y Garantías. La Ley del más débil". Traducción de Perfecto Andrés Ibáñez y Andrea Greppi. Editorial Trotta. Madrid.
- FOUCAULT, Michel (2010). "Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión". Traducción de surveiller el punir. Primera reimpresión de la segunda edición revisada y corregida. Editorial Siglo XXI de España editores s.a. Madrid.
- GALAIN PALERMO, Pablo y ROMERO SÁNCHEZ, Angélica (2007). "Criminalidad organizada y reparación. (Hacia una propuesta político-criminal que disminuya la incompatibilidad entre ambos conceptos). En: Modernas Tendencias de Dogmática Penal y Política Criminal. Libro Homenaje al Dr. Juan Bustos Ramírez". José Urquiza Olachea (Director). Editorial IDEMSA. Lima.
- GARCÍA-PABLOS, Antonio (2003). "Tratado de criminología". Tercera Edición. Editorial Tirant Lo Blanch. Valencia.
- JAKOBS, Günther (1996). "Sociedad, Norma y Persona". Editorial Civitas. Madrid.
- JESCHECK, Hans-Heinrich y WEIGEND, Thomas (2002). "Tratado de Derecho Penal. Parte General". Traducción de Miguel Olmedo Cardenete. Quinta Edición corregida y ampliada. Editorial COMARES. Granada.
- JAKOBS, Günther (2003). "Derecho Penal del Enemigo". Editorial Hammurabi. Buenos Aires.
- JAKOBS, Günther y CANCIO MELÍA, Manuel (2003). "Derecho Penal del Enemigo". Editorial Civitas. Madrid.

- JAKOBS, Günther y POLAINO-ORTS, Miguel (2011). "Persona y Enemigo". Editorial Ara. Lima.
- LAMAS PUCCIO, Luis (2017). "La Prueba Indiciaria en el delito de lavado de activos". Editorial instituto Pacífico. Lima.
- LÓPEZ GUERRA, Luís; ESPÍN, Eduardo; GARCÍA MORILLO, Joaquín; PÉREZ TREMP, Pablo; SATRÚSTEGUI, Migue. *"Manuales de Derecho Constitucional"*. Volumen I *"El Ordenamiento Constitucional. Derechos y Deberes de los ciudadanos"*. Séptima Edición. Editorial Tirant Lo Blanch. Valencia 2007.
- LÓPEZ REY, Manuel (1975). "Criminología". Editorial Aguilar. Madrid.
- MARQUÉZ PIÑERO, Rafael (2006) "Derecho Penal. Parte General". Editorial Trillas. México.
- MORENO HERNÁNDEZ, Moisés (2007). "Internacionalización del Derecho Penal y la Dogmática Penal". En: Modernas Tendencias de Dogmática Penal y Política Criminal. Libro Homenaje al Dr. Juan Bustos Ramírez". José Urquiza Olaechea (Director). Editorial IDEMSA. Lima.
- ORÉ SOSA, Eduardo (2009). "Temas de Derecho Penal". Editorial Reforma. Lima.
- ORTS BERENGUER, Enrique y GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis (2004). "Compendio de Derecho Penal. Parte General y Especial". Editorial Tirant lo Blanch. Valencia.
- PALAZZO, Francesco (2015). "Derecho penal del enemigo. Derecho penal, constitución". En: Dogmática Penal de Derecho Penal Económico y Política Criminal. Tomo II, Homenaje a Klaus Tiedemann. Segunda Edición. Editorial Gaceta Jurídica. Lima.

- PAREDES PEREZ, Jorge Martín (1995). *“Para Conocer el Código Penal”*. Segunda Edición. Editorial Grijley. Lima.
- PARIONA PASTRANA, Josué (2017). “El delito precedente en el delito de lavado de activos. Aspectos sustantivo y consecuencias procesales”. Editorial Instituto Pacífico. Lima.
- PEÑA CABRERA, Raúl (1995). “Tratado de Derecho Penal. Parte General”. Tomo I. Segunda Edición. Editorial Grijley. Lima.
- PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl (2007). “La Política Criminal en la sociedad de riesgo”. En: *Modernas Tendencias de Dogmática Penal y Política Criminal. Libro Homenaje al Dr. Juan Bustos Ramírez*. José Urquiza Olachea (Director). Editorial IDEMSA. Lima.
- PRADO SALDARRIAGA, Víctor (1995). “Derecho Penal. Parte General”. Editorial Jurídica Grijley. Lima.
- PRADO SALDARRIAGA, Víctor (1996). “Todo sobre el Código Penal”. Tomo II. Editorial IDEMSA. Lima.
- PRADO SALDARRIAGA, Víctor (2006). “Criminalidad Organizada”. Editorial IDEMSA. Lima.
- PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto (2012). “Módulo sobre la lucha contra la Criminalidad organizada”. Editorial De la Academia de la Magistratura. Lima.
- PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto (2013). “Criminalidad organizada y lavado de activos”. Editorial Idemsa. Lima.
- PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto (2016). “Criminalidad organizada Parte Especial”. Editorial Instituto Pacífico. Lima.

- PRADO SALDARRIAGA, Víctor Roberto; DEMETRIO CRESPO, Eduardo; VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, Fernando; VAN WEEZEL, Alex y COUSO, Jaime (2015). "Determinación Judicial de la pena". Editorial Instituto Pacífico. Lima.
- QUINTERO OLIVARES, Gonzalo (2015). "Políticas criminales nacionales y globalización". En: Dogmática Penal de Derecho Penal Económico y Política Criminal. Tomo II, Homenaje a Klaus Tiedemann. Segunda Edición. Editorial Gaceta Jurídica. Lima.
- ROXÍN, Claus (2002). "Política Criminal y Sistema del Derecho Penal". Traducción e Introducción por Francisco Muñoz Conde. Segunda Edición. Primera Reimpresión de la Editorial Hammurabi. Editorial José Luis Depalma Editor. Buenos Aires.
- ROXÍN, Claus (2008). "Política Criminal y Sistema del Derecho Penal". Traducción e Introducción por Francisco Muñoz Conde y José Luis Hammurabi. Editorial Desalma Impresor. Buenos Aires.
- RUBIO CORREA, Marcial (1999). "Estudio de la Constitución Política de 1993". Tomo 1. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima.
- SALINAS SICCHA, Ramiro (2008). "Derecho Penal. Parte Especial". Tercera Edición Corregida y aumentada. Editorial Grijley. Lima.
- SILVA SÁNCHEZ, José María (2000). "*Política Criminal y Persona*". Editorial Rubinzal-Culzoni. Buenos Aires.
- VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe (1997). "Código Penal". Editorial Grijley. Lima.

VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe (2006). *“Derecho Penal. Parte General”*. Editorial Grijley. Lima.

VON BELING, Ernst (2002). “Esquema de Derecho penal. La doctrina del Delito-Tipo”. Editorial Librería El Foro. Buenos Aires.

VON LISZT, Franz (2014). “La idea fin en el derecho penal”. Editorial Instituto Pacifico. Lima.

WEZEL, Hans (1956). “Derecho Penal Parte General”. Traducción de Carlos Fontan Balestra. Editorial Reque De Palma Editor. Buenos Aires.

ZAFFARONI, Eugenio; ALAGIA, Alejandro y SLOKAR, Alejandro (2002). “Derecho penal, Parte General”. Segunda Edición, Editorial Ediar. Buenos Aires.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl (2007). “Derecho Penal y Protesta social”. En: Modernas Tendencias de Dogmática Penal y Política Criminal. Libro Homenaje al Dr. Juan Bustos Ramírez”. José Urquizo Olachea (Director). Editorial IDEMSA. Lima.

ZARZOSA CAMPOS, Carlos (1993). *“Derecho Penal. Parte General I”*. Editorial Fondo de Fomento o la Cultura. Trujillo.

ZUÑIGA RODRÍGUEZ, Laura (2009). “Contribución a la determinación del injusto penal de organización criminal”. Editorial Comares. Granada.

### **HEMEROGRÁFICAS**

ÁLVAREZ DOYLE, Daniel (2017). “La Doctrina Parot y el fantasma del Derecho penal del Enemigo. A propósito del Caso Del Río Prada contra el Reino de España”. En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Información Especializada para Abogados, Jueces y Fiscales. Editorial Gaceta Jurídica, Febrero, Tomo 92, Lima.

- ARBULÚ RAMÍREZ, José Antonio (2016). "Los derechos del enemigo. Perspectiva de política criminal para enfrentar la delincuencia". En: Actualidad Penal al día con el Derecho pena, Procesal Penal, Penitenciario, Criminología. Editorial Instituto Pacífico, Agosto, N° 26, Lima.
- ARISMENDÍZ AMAYA, Eliu (2016). "Los delitos de organización en el sistema de organización criminal. A propósito del decreto Legislativo N° 1244". En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Información Especializada para Abogados, Jueces y Fiscales. Editorial Gaceta Jurídica, Noviembre, Tomo 89, Lima.
- BOCANEGRA ZEGARRA, Brando Aldahir (2016). "La Imputación Objetiva en los delitos de organización. A propósito de la Ley contra el crimen organizado". En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Información Especializada para Abogados, Jueces y Fiscales. Editorial Gaceta Jurídica, Noviembre, Tomo 89, Lima.
- BOTTKE, Wilfried (1998). "Mercado, criminalidad organizada y blanqueo de dinero en Alemania". En: *Revista Penal*. N° 2. Praxis, Barcelona.
- BUSTOS RAMÍREZ, Juan (2004). "Obras Completas". Tomo II: "Control Social y otros estudios". Editorial Ara Editores. Lima.
- CASAS RAMÍREZ, Wilfredo (2016). "La criminalidad organizada: sus diferencias con los conceptos de concierto criminal, banda, coautoría y asociación ilícita". En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Información Especializada para Abogados, Jueces y Fiscales. Editorial Gaceta Jurídica, Julio, Tomo 85, Lima.
- CASAS RAMÍREZ, Wilfredo (2017). "Organización criminal y su deslinde con otras acepciones semejantes. A propósito del Decreto Legislativo N° 1244". En:

- Actualidad Penal al día con el Derecho pena, Procesal Penal, Penitenciario, Criminología. Editorial Instituto Pacífico, Noviembre, N° 41, Lima.
- CHANJAN DOCUMENT, Rafael H. (2016). "Las comunidades indígenas y el derecho penal del enemigo". En: Actualidad Penal al día con el Derecho pena, Procesal Penal, Penitenciario, Criminología. Editorial Instituto Pacífico, Agosto, N° 26, Lima.
- CHINCHAY CASTILLO, Alcides (2016). "Proporcionalidad, Legalidad, Política criminal, boca de la ley y otros intentos de objetivar la justicia". En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Información Especializada para Abogados, Jueces y Fiscales. Editorial Gaceta Jurídica, Febrero, Tomo 80, Lima.
- COSTA, Gino; FIGUEROA, Aldo y ROMERO, Carlos (2015). "¿Cómo ganar la lucha contra el crimen organizado en el Perú? Aportes para una estrategia nacional contra el crimen organizado". En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Información Especializada para Abogados, Jueces y Fiscales. Editorial Gaceta Jurídica, Diciembre, Tomo 78, Lima.
- FOFFANI, Luigi (2001). "Criminalidad Organizada y criminalidad económica". En: Revista Penal. N° 7, Praxis, Barcelona.
- GUEVARA VELÁSQUEZ, Iván Pedro (2017). "EL Decreto Legislativo N° 1307. Entre la eficacia y el Garantismo". En: Actualidad Penal al día con el Derecho pena, Procesal Penal, Penitenciario, Criminología. Editorial Instituto Pacífico, Marzo, N° 33, Lima.
- HERNÁNDEZ MIRANDA, Edith (2016). "Técnicas especiales de investigación contra el crimen organizado". En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Información

Especializada para Abogados, Jueces y Fiscales. Editorial Gaceta Jurídica, Noviembre, Tomo 89, Lima.

HERRERA GUERRERO, Mercedes (2016). “La Prueba trasladada en los procesos penales seguidos contra miembros de organizaciones criminales”. En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Información Especializada para Abogados, Jueces y Fiscales. Editorial Gaceta Jurídica, Noviembre, Tomo 89, Lima.

JIMÉNES CORONEL, Eiser Alexander (2016). “La delimitación jurídica del derecho penal del enemigo en un Estado de derecho”. En: Actualidad Penal al día con el Derecho Penal Procesal Penal, Penitenciario, Criminología. Editorial Instituto Pacífico, Julio, volumen 25, Lima.

JIMÉNES CORONEL, Eiser Alexander (2017). “Una defensa utilitarista al derecho penal del enemigo en casos de criminalidad organizada”. En: Actualidad Penal al día con el Derecho Penal Procesal Penal, Penitenciario, Criminología. Editorial Instituto Pacífico, Mayo, N° 35, Lima.

LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, Jacobo (2001). “Posición de la Unión Europea sobre el crimen organizado. La criminalidad organizada. Aspectos sustantivos, procesales y orgánicos”. En: GRÁNADOS PÉREZ, Carlos (director), “Cuadernos de Derecho Judicial”, N° 2, Madrid.

MILLA VÁSQUEZ, Diana Gisella (2016). “Política criminal de tolerancia cero en España y Perú. Restricción de los beneficios penitenciarios por delitos de crimen organizado, terrorismo y delitos conexos”. En: Actualidad Penal al día con el Derecho pena, Procesal Penal, Penitenciario, Criminología. Editorial Instituto Pacífico, Octubre, N° 28, Lima.



- MIR PUIG, Carlos (2017). "El derecho penal de la seguridad: La custodia de seguridad". En: Actualidad Penal al día con el Derecho pena, Procesal Penal, Penitenciario, Criminología. Editorial Instituto Pacífico, Julio, N° 37, Lima.
- ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM) (2013). "protección de personas ante el crimen organizado transnacional. Editorial CAD impresiones. Lima.
- PAUCAR CHAPPA, Marcial Eloy (2017). "El delito de organización y banda criminal en el Perú". En: Actualidad Penal al día con el Derecho pena, Procesal Penal, Penitenciario, Criminología. Editorial Instituto Pacífico, Enero, N° 31, Lima.
- PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl (2015). "La reforma acusatoria del Proceso Penal Ordinario: a propósito del Decreto Legislativo N° 1206". En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Información Especializada para Abogados, Jueces y Fiscales. Editorial Gaceta Jurídica, Diciembre, Tomo 78, Lima.
- PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl (2017). "El crimen organizado transnacional y las modificaciones legislativas en los delitos contra la tranquilidad pública". En: Actualidad Penal al día con el Derecho pena, Procesal Penal, Penitenciario, Criminología. Editorial Instituto Pacífico, Marzo, N° 33, Lima.
- PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl (2018). "La reforma constitucional de la detención en flagrante delito: una formulación de política criminal en el marco de la inseguridad ciudadana". En: Actualidad Penal al día con el Derecho pena, Procesal Penal, Penitenciario, Criminología. Editorial Instituto Pacífico, Febrero, N° 44, Lima.

PINO TICONA, Davinson Carlos (2015). "Beneficios Penitenciarios: uniformización de los criterios de interpretación adoptados por el TC, la Corte Suprema y las leyes N° s 29604, 30101 y 30332". En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Información Especializada para Abogados, Jueces y Fiscales. Editorial Gaceta Jurídica, Diciembre, Tomo 78, Lima.

TOYOHAMA ARAKAKI, Miguel (2017). "El nuevo delito de Banda Criminal (artículo 317-B del Código Penal)". En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Información Especializada para Abogados, Jueces y Fiscales. Editorial Gaceta Jurídica, Enero, Tomo 91, Lima.

VALERSA HUMPIRE, José Gerardo (2017). "Algunas consideraciones en torno a la anticipación de la tutela penal en el nuevo delito de organización criminal". En: Gaceta Penal & Procesal Penal. Información Especializada para Abogados, Jueces y Fiscales. Editorial Gaceta Jurídica, Febrero, Tomo 92, Lima.

VÁSQUEZ SOLÍS, Leoncio Enrique (2017). "La teoría de la pena ¿función resocializadora o retributiva? Un análisis crítico de la realidad del sistema penitenciario peruano". En: Actualidad Penal al día con el Derecho pena, Procesal Penal, Penitenciario, Criminología. Editorial Instituto Pacífico, Julio, N° 37, Lima.

VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, Fernando (2011). "Qué es la Política Criminal?". En: Gaceta Penal & Procesal Penal, Editorial Gaceta Jurídica, tomo 19, Enero, Lima.

## **LEGISLACION**

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE PERÚ DE 1993

CÓDIGO PENAL

CÓDIGO PROCESAL PENAL DE 2004

CÓDIGO DE EJECUCIÓN PENAL

LEY N° 30076: “Ley que modifica el Código Penal, Código Procesal Penal, Código de Ejecución Penal y el Código de los Niños y Adolescentes y crea registros y protocolos con la finalidad de combatir la inseguridad ciudadana.

LEY N° 30077, “Ley contra el crimen organizado”.

LEY N° 30262, “Ley que modifica el Código de ejecución Penal, la ley contra el Crimen Organizado, la ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes”.

EI DECRETO LEGISLATIVO N° 1244, “Decreto Legislativo que fortalece lucha contra el crimen organizado y la tenencia ilegal de armas”.

LEY N° 30558, Ley de reforma del literal f) del inciso 24 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú.

## **LINCOGRAFÍA**

PPK destinará más de S/ 14,000 millones para luchar contra la inseguridad ciudadana y corrupción En: <http://gestion.pe/politica/ppk-destinara-mas-s-14000-millones-luchar-contra-inseguridad-ciudadana-y-corrupcion-2169028>

ARBUROLA VALVERDE, Allan (2015) “Derecho Penal del enemigo. Capítulo 5: Derecho Penal del ciudadano y sus diferencias con el derecho penal del enemigo”. En <http://www.mailxmail.com/curso-derecho-penal-enemigo/derecho-penal-ciudadano-sus-diferencias-derecho-penal-enemigo>

Estas son las medidas de seguridad ciudadana para los primeros 100 días. El Gobierno de PPK dispuso una serie de iniciativas para emprender la lucha contra la delincuencia En: <http://larepublica.pe/politica/793220-estas-son-las-medidas-de-seguridad-ciudadana-para-los-primeros-100-dias>

ARBUROLA VALVERDE, Allan (2015). “Derecho Penal del Enemigo: Capítulo 4: Derecho Penal de Emergencia”. En <http://www.mailxmail.com/curso-derecho-penal-enemigo/derecho-penal-emergencia>

Las claves de las medidas del Gobierno contra la delincuencia. En: <http://rpp.pe/politica/gobierno/las-claves-de-las-medidas-del-gobierno-contra-la-delincuencia-noticia-1006063>

BENITEZ ORTÚZAR, Ignacio Francisco (2015). “III. Sistema Penal y Derecho Premial”. En <http://libros-revistas-derecho.vlex.es/vid/iii-sistema-penal-derecho-premial-246255>

¿En qué consisten las medidas del Gobierno de PPK contra el crimen organizado?

Aquí te las explicamos. En: [consisten-medidas-gobierno-ppk-crimen-organizado-explicamos-28659](#)

PRADO SALDARRIAGA, Víctor. "la Política Penal de Emergencia: Función y Efectos". En:

<http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZlfKw8dvQAhXFZCYKHWU4DfkQFggtMAM&url=http%3A%2F%2Frevistas.pucp.edu.pe%2Findex.php%2Fderechoysociedad%2Farticulo%2Fdownload%2F14193%2F14806&usg=AFQjCNEdstZyB95Y81iJ0wGJB1YgSbWnZA&bvm=bv.139782543,d.eWE>